

El negocio de la guerra



Dario Azzellini

El negocio de la guerra

 Txalaparta

Título: El negocio de la guerra
Título original: Das Unternehmen Krieg
Autor: Dario Azzellini
Recopilación: Dario Azzellini y Boris Kanzleiter
Portada y diseño colección: Esteban Montorio

Edición:
Editorial Txalaparta s.l.
Navaz y Vides 1-2
Apdo. 78
31300 Tafalla
NAFARROA
Tfno. 948 703934
Fax 948 704072
txalaparta@txalaparta.com
<http://www.txalaparta.com>

Primera edición
Berlín, 2003
Primera edición de Txalaparta
Tafalla, octubre de 2005

Copyright
© Txalaparta para la presente edición
© Dario Azzellini

Fotocomposición
Nabarriera gestión editorial
Impresión
Gráficas Lizarra

I.S.B.N.
84-8136-314-6
Depósito legal
NA-1345-05

The logo for Txalaparta features a stylized graphic of three vertical bars of varying heights on the left, followed by the word "Txalaparta" in a serif font. A thick, grey, brush-like stroke underlines the text.

Prólogo a la presente edición

Las formas de conducción de las guerras están cambiando. Al lado de los ejércitos estatales surgen cada vez más compañías militares privadas (en inglés Private Military Contractors, PMC), paramilitares, Señores de la Guerra, ejércitos privados y mercenarios como nuevos actores de guerra. Actualmente, las guerras se llevan a cabo con menor frecuencia entre Estados nacionales, y con mayor frecuencia en el interior de éstos entre tropas regulares e irregulares y, en todos los casos, contra la población civil. Mientras a lo largo de mucho tiempo estos fenómenos fueron ignorados, últimamente se han hecho visibles con mayor fuerza. Bajo la denominación de “nuevas guerras” se da origen incluso a un término particular para el debate en las ciencias sociales y en los *mass media*. Generalmente, se considera a la creciente aparición de empresas privadas de violencia como síntoma del «debilitamiento del Estado», «caos», y «anarquía»; así como una pérdida del «monopolio de la violencia estatal» en “Estados fallidos” frente a los cuales Occidente se encuentra más o menos impotente.

Con este trabajo queremos analizar estos fenómenos desde otra perspectiva. Queremos demostrar cómo es precisamente la globalización del capitalismo neoliberal impulsada por Occidente la que está llevando a nuevas guerras en las periferias de este sistema.

Esto no sólo en un sentido abstracto, ya que la creciente crisis de la deuda produce fragmentaciones sociales que se manifiestan en estallidos violentos, en las cuales los Señores de la Guerra compiten por la gestión de la ayuda humanitaria, los recursos naturales o el control del narcotráfico en las ruinas estatales que dejan tras de sí los programas del Banco Mundial.

Mediante este estudio pretendemos demostrar que el uso de violencia privatizada como síntoma inherente del supuesto “debilitamiento del Estado”, está siendo impulsado en gran medida por Occidente. Esto queda particularmente patente en el desarrollo que presenta el ejército estadounidense, el cual crea en su mismo seno elementos de privatización que integran la conducción de guerras a la economía de mercado. Las llamadas compañías militares privadas –generalmente fundadas por antiguos soldados de carrera– asumen hoy ya no sólo la construcción de campamentos militares, sino cada vez más (también) misiones de combate. Ha transcurrido ya mucho tiempo desde que la declaración de la independencia de Estados Unidos calificó el uso de mercenarios por el rey de Inglaterra como «totalmente indigno de una nación civilizada». En la actualidad se privatizan incluso las misiones de las Naciones Unidas.

Analizando las nuevas guerras en Latinoamérica, África, los Balcanes y Asia, no encontramos ningún tipo de «anarquía», «estallidos de violencia irracionales» y «conflictos étnicos», como se sugiere en innumerables medios de comunicación. Hemos llegado más bien a descifrar un nuevo orden de guerra, donde los actores militares privados de los Estados y las elites son usados para asegurar su dominio. Tal como hemos venido investigando desde hace unos años, en casos concretos esos actores pueden ser paramilitares para la lucha contrainsurgente

en Colombia¹ y México² como también compañías militares privadas que reclutan antiguos policías para patrullar en los protectorados de los Balcanes, Afganistán e Iraq.

Mientras tanto, la misma conducción de la guerra se ha convertido en algunos casos en el objetivo principal de los actores con el fin de lograr ganancias en el capitalismo global. Esto es válido, por ejemplo, para los aparatos militares africanos, que se transforman en empresas de la industria minera y llevan a cabo luchas armadas entre ellas por el dominio de las minas, dejando tras de sí no sólo un inmenso número de víctimas (sólo la guerra del Congo le ha costado la vida desde 1994 a un número de personas que oscila entre los 2,5 y 3,5 millones, siendo el 90% civiles), sino también sociedades que tienen que reabrir otra vez sus caminos hacia la emancipación.

Las “nuevas guerras” no constituyen un fenómeno que pueda ser considerado como homogéneo. La guerra de las compañías mineras-militares en el Congo difícilmente puede ser comparada con el programa paramilitar de lucha contrainsurgente colombiana, que sigue la doctrina del *Low intensity warfare* (Operación militar de baja intensidad) del ejército de Estados Unidos, enseñada en el centro de formación para los militares latinoamericanos (ex Escuela de las Américas) ubicado en Fort Benning en el Estado de Georgia.

Un cuerpo de guardaespaldas reclutado entre mercenarios en Estados Unidos para el presidente afgano Abdul Hamid Karzai es algo diferente a los antiguos militares del ejército del apartheid sudafricano, quienes protegen hoy los oleoductos en Nigeria al servicio de consorcios transnacionales. Antiguos generales altamente condecorados del ejército estadounidense –quienes prestan ayuda militar privada en la creación del ejército

1. Azzellini, Dario; Zelik, Raul: *Kolumbien – Grosse Geschäfte, staatlicher Terror und Aufstandsbewegung*, Editorial Neuer ISP, Frankfurt, 1999.

2. Kanzleiter, Boris; Dirk, Pesara: *Die Rebellion der Habenichtse. Der Kampf für Land und Freiheit gegen deutsche Kaffeebarone in Chiapas*, Edition ID-Archiv, Berlín, 1997.

croata y permitieron que éste realizara una de las mayores “limpiezas” étnicas de la guerra de Yugoslavia—, tienen poco en común con los narcotraficantes en el Kosovo o Macedonia. Éstos libran batallas competitivas bajo la apariencia de representantes armados de «grupos étnicos», hasta ser integrados por parte de la “comunidad internacional”, bajo un control de protectorado en las funciones gubernamentales. De allí que el análisis de casos específicos sirva para la diferenciación entre ellos y, al mismo tiempo, sea requisito indispensable para generalizaciones.

En un texto introductorio, Thomas Seibert critica al discurso mismo sobre las “nuevas guerras”. Seibert afirma por una parte que los diversos fenómenos atribuidos a las “nuevas guerras” como, por ejemplo, el surgimiento de ejércitos no estatales, no son tan novedosos aunque sí se estén transformando. Por otra parte, el autor también asevera que con el cambio del contexto global desde finales de los ochenta, se forman estructuras sociales y políticas que promueven la expansión de las economías de guerra. Bajo esta perspectiva, formas de transformación de la conducción de guerras en una parte de la economía de mercado, el creciente surgimiento de paramilitares, ejércitos de mercenarios y de compañías militares privadas, representan una consecuencia directa del capitalismo neoliberal.

En un texto relativo a Colombia, Dario Azzellini señala de forma detallada cómo se crearon grupos paramilitares por parte de las elites locales y se contrataron compañías militares privadas, todo ello bajo auspicio financiero y político proveniente principalmente de Estados Unidos. En Colombia son asesinadas anualmente por motivos políticos más personas que durante los 16 años de la dictadura de Pinochet en Chile. Las víctimas son generalmente sindicalistas, activistas de los derechos humanos o miembros de movimientos campesinos, quienes son calificados por los paramilitares como simpatizantes de la guerrilla.

Un modelo parecido al colombiano ha sido descubierto por el especialista en Kurdistán y Turquía, Knut Rauchfuss. Él mismo explica cómo una alianza entre políticos, militares y narcomafia dirige la paramilitarización del conflicto kurdo en Turquía, y cómo existen al mismo tiempo nexos que llevan hacia Alemania.

En otra parte del libro referente a México, Dario Azzeellini estudia cómo la paramilitarización más allá del uso de tropas en la lucha contrainsurgente, ha sido transformada en nuevas formas de organización social, las cuales incluyen comunidades rurales enteras. Este modelo se observa también en la guerra en Guatemala, analizada en este mismo trabajo por Matilde Gonzáles y Stefanie Kron. Estas autoras se concentran en la relación existente entre paramilitarismo, violencia y género. Durante los años ochenta, el conflicto con la guerrilla en este pequeño país centroamericano dejó un saldo de decenas de miles de víctimas, y aún años después de su fin continúa existiendo en las comunidades un cierto orden de género producido por violaciones masivas.

Boris Kanzleiter parte de los ejemplos de Serbia, Bosnia Herzegovina y Kosovo para analizar cómo se ocasionaron “diferencias étnicas” durante la guerra de Yugoslavia como resultado del paramilitarismo. Los paramilitares formados desde los aparatos de seguridad de Estados llevaron a cabo campañas de robo y despojo contra la población civil, que se vio obligada a posicionarse dentro de “límites étnicos”. Al mismo tiempo, los paramilitares se transformaron a través de una especie de “acumulación originaria” en protagonistas del proceso de privatización ya que poseían un buen capital y pudieron establecer “complejos criminales-institucionales” que actúan más allá del término de la guerra.

En una entrevista realizada por Boris Kanzleiter, el especialista Matin Baraki explica cómo en Afganistán por medio de la “guerra contra el terror”, se impuso una reorganización del sistema de los Señores de la Guerra tras la caída de los talibanes. Dicho sistema reubicó al país en el primer lugar de la producción internacional de

heroína desde el año 2002. Matin Baraki afirma que tanto las posibilidades de emancipación política y social como las capacidades de articulación de la oposición fueron obstruidas por la institución de los Señores de la Guerra convertidos en pilares de la administración internacional.

Henri Myrntinen evidencia cómo la violencia en Indonesia, generalmente reseñada en los medios como conflictos «étnicos» y «religiosos», se suscribe de manera clara a intereses de poder económico y habitualmente es dirigida o aprovechada por el Estado. Las raíces del conflicto y la manera como él mismo se ha llevado a cabo datan de los años de la dictadura de Suharto y con ello representan una “vieja” nueva guerra.

Boris Kanzleiter y Dario Azzellini realizan en dos capítulos unos apuntes generales sobre compañías militares privadas (CMPs), fenómeno hasta ahora bastante desconocido pero que adquiere una importancia cada vez mayor. Éstas representan la forma moderna de los mercenarios, y desempeñan un importante papel en cada uno de los ejemplos regionales descritos. Las CMPs –fundadas a menudo por antiguos militares de alto rango– reclutan personal cualificado y lo ofrecen como servicio a misiones bélicas para asesoramiento militar, labores de reconocimiento e inteligencia y formación militar. Dieter Drüssel en otro capítulo describirá el funcionamiento de la CMP DynCorp, la cual no sólo realiza actividades en los Balcanes, Afganistán, Iraq y Colombia, sino que también ejerce labores de seguridad externalizadas en el aparato estatal de Estados Unidos.

El especialista en África, Björn Aust, analizará por su parte la economía de la guerra del Congo que se ha convertido desde mediados de los años noventa, en la causa de la “primera guerra mundial del África”. Después de los fracasados intentos de un desarrollo recuperador y casi totalmente olvidado por la opinión pública occidental –incluyendo a sus representantes críticos–, en el corazón del África se extiende en la actualidad una economía de libre mercado radical y desregulada. En esta

economía, aparatos militares, milicias y paramilitares libran batallas armadas compitiendo por la explotación de materias primas que son exportadas por compañías transnacionales hacia Europa, Japón o Estados Unidos. Lisa Rimli llega a una conclusión similar en una aportación a este estudio, refiriéndose a la economía de guerra en Angola, que encuentra incluso continuación después de la firma de un acuerdo de paz. La autora observa cómo las convenciones de las Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana (OUA) para la proscripción de actividades de mercenarios acepta de manera implícita el uso de mercenarios por parte de gobiernos reconocidos.

En un último capítulo Dario Azzellini presentará el caso de Iraq, donde nos encontramos ya con que una de cada ocho personas trabajando en tareas militares o de seguridad –que en un contexto de guerra también son militares– es un empleado de una CMP.

Cuando este libro fue publicado en Alemania, en junio del 2003, el tema de las compañías militares privadas era casi una novedad que había sido ignorada y descuidada durante mucho tiempo. Sólo después de los ataques de milicianos iraquíes en Fallujah el 31 de marzo de 2004 empezaron a ser publicadas más informaciones al respecto. A pesar de que en un primer momento se trató de convencer al mundo de que los estadounidenses asesinados eran civiles, con el paso del tiempo no se pudo ocultar que éstos eran empleados de la compañía militar privada Blackwater USA. Aunque supuestamente son civiles y no militares, los empleados de ese tipo de compañías asumen plenamente tareas militares. En el caso de la Blackwater los “empleados” como guerreros privados –personal militar altamente cualificado y entrenado–, asumen hasta tareas de más riesgo que el ejército mismo. En Iraq, por ejemplo, estaban encargados de llevar a cabo los combates detrás de las líneas enemigas, es decir, se introducían sin ser observados a la ciudad de Fallujah para llevar a cabo acciones militares, cuando ésta estaba controlada por fuerzas rebeldes

iraquíes. Naturalmente este trabajo altamente peligroso fue muy bien pagado (hasta 1.500 dólares al día). Incluso existen varias fotos que muestran a los “empleados civiles” de Blackwater USA en Iraq con armas de guerra actuando sin uniforme y disparando desde los tejados junto a soldados estadounidenses. Ejércitos privados, expertos militares e informáticos al servicio de las tropas estadounidenses, radares del ejército de Estados Unidos manejados por compañías privadas, aparecen como elementos de ciencia ficción. Sin embargo, la realidad a veces va más allá y es más increíble que cualquier película de este género. El negocio mundial de las compañías militares privadas alcanza, según estimaciones, unos 200 millardos de dólares anuales.

La presente edición del libro llega a nuestras manos con diversas modificaciones respecto a la edición alemana, así como también a ediciones en otros países (Venezuela, Cono Sur). Por un lado, esta edición no incluye un capítulo sobre las empresas de seguridad y vigilancia en Alemania. Por el otro lado, incluye un capítulo sobre Iraq –que por razones evidentes no podía estar incluido en la edición alemana dado que la invasión de Iraq empezó cuando el libro llegó a la imprenta. Del mismo modo, el capítulo sobre las diferentes clasificaciones de CMPs es totalmente nuevo. Además, esta edición cuenta con capítulos actualizados y ampliados como los referentes a Colombia y México.

Con la basta información que presenta esta recopilación, reunida por expertas y expertos en los diferentes contextos específicos, no queremos atemorizar ni hacer perder esperanzas a nadie. Al contrario, estamos convencidos de que es necesario conocer adecuadamente el funcionamiento y los actores del nuevo orden de guerra para poder oponerse a él. Nos parece particularmente importante reconocer que los límites entre guerra y paz se desdibujan cada vez más. Tal como lo muestran las líneas de desarrollo presentadas en este libro, los bombardeos de Bagdad o los de Belgrado no constituyen en absoluto la corta interrupción de una “paz” imagi-

nada, donde la “guerra” aparece sólo como un estado de excepción. En realidad lo que hoy se expande por regiones cada vez más amplias del globo es un estado de guerra permanente de diferente intensidad que necesita respuestas mucho más complejas que la simple demanda de un cese a los bombardeos. Lo que requiere la situación actual es una crítica estructural a la “guerra”, como un nuevo orden de expresión de las tendencias actuales de desarrollo del capitalismo.

Los autores, agosto 2005

I

El nuevo orden de la guerra

El capitalismo global y su salvaje cara oculta

Thomas Seibert

Para el año 2002, el «barómetro de conflicto» que publica anualmente el Instituto de Investigación sobre Conflictos Internacionales de Heidelberg (Alemania) dio cuenta de 43 conflictos políticos o sociales conducidos militarmente, de los cuales 13 son calificados como guerras con extensión territorial. Sin embargo, realmente una de ellas, igual que en el año anterior, se llevó a cabo entre Estados soberanos: la guerra de Estados Unidos y sus aliados contra Afganistán.⁶ No obstante, mirando con más detalle, sólo en el sentido formal de la palabra se puede considerar esta guerra como «clásica», es decir, entendida como una guerra interestatal, ya que la misma no se conduce en contra del ejército regular de un Estado, sino contra los Señores de la Guerra talibanes y la red de Al Qaeda, e incluso con la ayuda de otros Señores de la Guerra. Además, la guerra en Afganistán forma parte de la Operación Libertad Duradera (*Opera-*

6. Referencia: www.hiik.de

tion *Enduring Freedom*) que no tiene límites temporales ni territoriales y que lucha contra una serie indefinida de posibles enemigos. Esta operación alcanzó su apogeo más reciente con el asalto a Iraq durante la primavera del año 2003, en clara violación de los principios del Derecho Internacional público, y que, evidentemente, no puede considerarse como una guerra en el sentido clásico de la palabra.

Cambio en los paradigmas del orden de la guerra

Esta afirmación parece comprobar el discurso iniciado por autores como François Jean, Jean-Christophe Rufin, Michel Ignatief, Mary Kaldor, Herfried Munkler y Erhard Eppler entre otros, según el cual el lugar de las “viejas guerras” conducidas por Estados nacionales soberanos y reguladas por el Derecho Internacional público está siendo ocupado por las “nuevas guerras”, que son conducidas por diversos actores muchas veces no estatales y sin ningún tipo de regulación legal.⁴ Aunque este discurso apunta a modificaciones históricas indiscutibles, no analiza aquello que desea explicar,⁵ lo que puede ser apreciado incluso desde el concepto de la guerra sobre el que se sustenta. Esto se debe a que la diferencia entre las guerras “nuevas” o “pos clásicas” por una parte, y las “viejas” o “clásicas” por la otra, se reduce al mismo nivel de la diferencia entre guerras “correctas» e “incorrectas” en un cambio normativo. Así, el discurso de las “nuevas guerras” legitima las “guerras correctas” –que

4. François Jean, Jean-Christophe Rufin, *Ökonomie der Bürgerkriege*, Munich, 1995; Mary Kaldor, *Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung*, Francoforte en el Meno; Michel Ignatief, *Die Zivilisierung des Krieges*, Hamburgo, 2000; Herfried Munkler, *Die neuen Kriege*, Reinbek, 2002; Erhard Eppler, *Vom Gewaltmonopol zum Gewaltmarkt? Die Privatisierung und Kommerzialisierung der Gewalt*, Francoforte en el Meno, 2002; Ulrich K. Preuss, *Krieg, Verbrechen, Blasphemie. Zum Wandel der bewaffneten Gewalt*, Berlín, 2002.

5. El presente ensayo critica el concepto de las “nuevas guerras” desde una perspectiva materialista histórica, que coloca a las guerras y al orden de las mismas en el contexto de la reproducción del dominio capitalista. Se abren accesos a este tipo de perspectivas, por una parte con Michael Hardt / Toni Negri, *Imperio El nuevo orden mundial*, Buenos Aires, 2002; y por otra con Robert Kurtz *Weltordnungskrieg. Das Ende der Souveränität und die. Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung*, Bad Honnef, 2003.

son reguladas por el Derecho Internacional público y conducidas por estados nacionales soberanos— como *ultima ratio* del intento de eliminar de la faz de la tierra el horror causado por las “guerras incorrectas”.

El argumento central para ello radica en su clasificación de «guerras de desintegración del Estado», como consecuencia del fracaso de una «estatalidad robusta». ⁶ La pacificación sólo podría alcanzarse entonces mediante el restablecimiento de un monopolio de poder estatal, si es necesario por la vía de una intervención militar y la implantación de una estructura de protectorado. Precisamente para eso, los Estados dominantes del sistema mundial capitalista ya se auto-apoderaron (y es aquí donde se evidencian los intereses políticos que rigen el discurso), intentando ejercer un dominio sobre la incontrolada y quizás incontrolable violencia en las periferias desde la segunda Guerra del Golfo a través de una serie de «guerras de ordenamiento mundial» (R. Kurz).

Aquí también se trata, aparte del cálculo dirigido hacia el control y la limitación, del acceso a los recursos y las fuerzas laborales, cuyo aprovechamiento todavía despierta un interés específico.

En contra de la diferenciación entre “viejas” y «nuevas» guerras, tan manejable como conforme al Estado, antes de nada se puede constatar que la construcción de una sucesión lineal de órdenes de guerra históricos, desde los ejércitos nómadas de la Edad Media hasta los ejércitos regulares del Estado nacional moderno, idealiza la realidad desde siempre. ⁷ Ya en tiempos anteriores, las guerras eran simultáneamente más y diferentes a supuestos conflictos armados regulados por el Derecho Internacional público entre los ejércitos regulares de Estados separados territorialmente y siguiendo cálculos racionales. Para empezar, los ejércitos regulares no pue-

6. Herfried Münkler en entrevista con Eberhard Sens, *Lettre International* 14, Winter 2002., p. 14ss.

7. Phase 2 berlin, *Wer vom Kriege für sich redet, sollte vom Krieg an sich schweigen*. En: Phase 2 Nro. 07/03, p. 14ss.

den ser concebidos en su génesis histórica como una institución del Estado nacional moderno, pues constituyen uno de los elementos de los cuales el Estado se origina en primera instancia. Incluso más adelante, las guerras conducidas por este tipo de ejércitos no podían ser analizadas sobre la base del cálculo racional de la soberanía en guerra. En este sentido, ya Marx hacía referencia al hecho de que la función de la guerra en el capitalismo no sólo se reduce a la conquista o a la usurpación de territorios extranjeros y de sus mercados, sus materias primas y su fuerza laboral, sino también comprende precisamente la destrucción sistemática y a menudo involuntaria de capital, con la cual de hecho se resolvieron las crisis de sobreproducción.

Por ello, los fenómenos atribuidos a las “nuevas guerras” pueden ser observados incluso en la mayor parte de las «viejas guerras»: el desacato a las diferencias entre combatientes y civiles y la amplia destrucción de la infraestructura económica, la cooperación de actores estatales y no estatales, asimetrías extremas entre las partes en guerra, la acción en espacios desestatalizados, la desaparición de los límites de toda codificación jurídica y política, y la sobredeterminación a través de etnicismo, racismo o “fundamentalismo”. Esto es válido también, y particularmente, para las dos Guerras Mundiales, específicamente en la guerra de conquista nacionalsocialista. En ella, el antisemitismo eliminatorio del imperio nacionalsocialista redujo en forma masiva los cálculos racionales planteados. La diferencia entre las “viejas” y las “nuevas” guerras tampoco se puede sostener respecto a las guerras de liberación anti y post-coloniales, en las cuales se encuentran también todos los fenómenos que, en primera instancia, deberían fundamentar la diferencia.

Las guerras calientes en la Guerra Fría y Mayo del 68

En el discurso de las “nuevas guerras”, el fin de la confrontación de bloques termina la transición que va de las guerras clásicas a las posclásicas. Sin embargo, en

realidad con la ruptura de cambio de época de 1989 termina, ante todo, una guerra que no fue ni clásica ni posclásica: la Guerra Fría entre Estados Unidos, la Unión Soviética y sus aliados. Empezando inmediatamente con el fin de la Segunda Guerra mundial, subordinó la competencia multipolar de diferentes estados nacionales, hasta entonces medida también militarmente, a una competencia bipolar a escala mundial entre dos bloques de Estados dominados uno por Estados Unidos y el otro por la URSS. Con ello, las guerras clásicas interestatales se habían imposibilitado *de facto*, tanto dentro de los bloques como entre ellos; y en lo sucesivo se limitaron a aquellos Estados que no pertenecían a ninguno de los bloques. Zonas de influencia nacional-estatal o interés de ocupación, colonialización o expansión ya no eran tanto el objeto de la competencia, más bien lo eran las mismas formas de reproducción capitalista que había en ambos bloques: la pax americana con su capitalismo monopolista o la pax soviética con su capitalismo monopolista de Estado, que eran órdenes de paz y de guerra al mismo tiempo.

Mientras no se tratase de remanentes conflictos coloniales (como por ejemplo, la guerra franco-argelina o la franco-vietnamita, o las guerras de Portugal en Angola, Guinea y Mozambique), los conflictos armados durante la época de la competencia de sistemas estaban dirigidos ante todo hacia la (re)integración o la expansión de ambos bloques. Se trataba de guerras “hacia adentro” (Hungría 1956, la República Socialista Checoslovaca 1968, diversas intervenciones estadounidenses principalmente en América Latina), o como «guerras de suplentes» conducidas por movimientos guerrilleros anti o poscolonialistas. Si el bloque dominado por los soviéticos hizo de la guerrilla un elemento funcional, el Occidente se apoyó en las dictaduras coloniales y poscoloniales que la guerrilla combatía, y en una contraguerrilla a menudo formada por mercenarios, cuyo proceder ya desde entonces se asimilaba al de los «movimientos rebeldes» de las “nuevas guerras”.

Y aunque tanto la guerrilla como la contraguerrilla, así como los regímenes establecidos por ambas, dependían estructuralmente de la alimentación de los bloques que había tras ellos, las guerras que conducían no cumplían en su funcionalidad para la confrontación de bloques.

En cualquier lugar donde tanto las revueltas propulsadas militarmente por la guerrilla, como los gobiernos que las originaban, superaban la propia instrumentalización e iban más allá, se abrieron posibilidades para el establecimiento de una fuerza que se liberase de la lógica de la competencia de sistemas y fuese por lo menos tendencialmente antagónica a la reproducción del dominio capitalista (bien sea monopólico o de Estado). Y en los casos en los cuales las tendencias que no habían desarrollado todavía su potencialidad fallaban frente a la prepotencia de la confrontación entre bloques, se les imponía la reproducción del capitalismo, que pasaba por encima de ellas, no sólo en el marco de la confrontación de bloques, si no también por medio de ella.

Naturalmente, lo anterior era válido también en el interior de cada uno de los bloques, donde la Guerra Fría se utilizó para solidificar la hegemonía ideológica y la reintegración de ámbitos opositores al sistema respectivo.

Durante los años sesenta, sin embargo, la funcionalidad de la competencia de sistemas para la reproducción del dominio capitalista fue disminuyendo continuamente. Entraron en crisis no sólo formas singulares de regulación y de representación del socialismo real o bien de la democracia liberal, sino las mismas formaciones de socialización fordista, fundamentadas en la producción industrial a gran escala, base de ambos sistemas. Al vislumbrarse alrededor de mayo de 1968 la posibilidad de un reforzamiento y una penetración mutua de las guerras de liberación anti y poscoloniales con el surgimiento vertiginoso de revueltas sociales y culturales en los países occidentales y orientales, la continuidad del dominio capitalista monopólico o de Estado estaba bajo serios riesgos.

El capital occidental respondió a la continua agudización de las crisis con una transformación de sus formas de socialización, que estuvo apoyada en la utilización sistemática de fuerzas productivas de tecnología de información. Al mismo tiempo, la intensificación de la competencia de sistemas promovida ante todo por el complejo militar-industrial de Estados Unidos y acompañada por un rearme masivo aumentó la presión sobre el bloque soviético, y llevó finalmente a la bancarrota de los países capitalistas de Estado, fortalecida también por el éxodo masivo, un movimiento migratorio que contó millones de personas. Al derrocamiento de sus aliados en el Oriente de Europa le siguió la disolución de la URSS, el desplome de los Estados en vías de desarrollo que dependían de ella en el Sur global y la derrota total de los últimos movimientos de emancipación anti o poscolonial. La Guerra Fría había terminado, y las guerras calientes que se habían llevado a cabo bajo sus condiciones empezaron a convertirse en otras, “nuevas guerras”: guerras cuyo contexto lo forma actualmente el capitalismo posfordista transformado.

La transición posfordista y el «Nuevo Orden Mundial»

A principio de la década de los noventa, los países antes dominados por el bloque soviético y los Estados del Sur en vías de desarrollo que seguían su modelo fueron incorporados por primera vez a un capitalismo realmente extendido a un nivel global, en el cual las corrientes de finanzas, mercancías y saberes tienden a estar libres de todas las limitaciones de los Estados nacionales y, a su vez, son sujetas a la regulación de una red de instituciones supranacionales (OTAN, OCDE, FMI, Banco Mundial). Con la creación de cadenas mundiales de valor se llegó a una reestructuración global de la división del trabajo, en la que el sector primario de la agricultura y la obtención de materias primas, y el sector secundario de la producción industrial fordista, que hasta ahora había sido el sector líder, cayeron bajo el domi-

nio del sector terciario de los servicios «inmateriales» (en el sentido más amplio de la palabra).⁸

Con la desvalorización sistemática de la fuerza laboral en la agricultura, la obtención de materias primas e industrial, que acompaña al fenómeno antes expuesto, se echó abajo el mito del «desarrollo recuperador», que ya era obsoleto desde el principio de la crisis de la deuda a comienzos de los años ochenta. Éste había prometido a los países con un sistema capitalista de Estado del segundo mundo «adelantar», y a los países en desarrollo del Tercer Mundo la futura incorporación al fordismo del Primer Mundo capitalista monopólico.

De hecho, la inclusión en el sistema mundial posfordista excluyó sistemáticamente de cualquier perspectiva de desarrollo a una «población sobrante» que se cuenta por millones y crece diariamente. Al cabo de pocos años se llegó a la amplia pauperización de sociedades completas tanto en el Sur como en el Este, a la desintegración de su sistema político y económico y a una migración masiva de aproximadamente 150 millones de personas (3% de la población mundial y 30 millones más que en 1990).⁹ Según estimaciones de la Cumbre Social de Ginebra de la Naciones Unidas del año 2000, más de 1,2 mil millones de personas deben sobrevivir con menos de un dólar al día. El poder adquisitivo de un sueldo promedio en América Latina ha llegado a ser hoy 27% menor que en 1980, mientras que el 40% del producto social bruto se concentra en manos del 1% de la población, con tendencia a un aumento drástico.

En parte, la situación en África y Asia es hasta más dramática. En total, la participación del 20% más pobre de la población mundial en la producción, inversiones

8. En aras de evitar un recurrente malentendido, quiero aclarar específicamente que el dominio del sector terciario determinado por el posfordismo es cualitativo y no cuantitativo: mientras el alcance del trabajo «material» (en la producción de bienes y la obtención de materias primas) ejecutado en el sector primario y secundario excede todavía el trabajo «inmaterial» (en la prestación de servicios) del sector terciario, este último, sin embargo, construye el marco en el cual el primero se da y es aprovechado.

9. World Migration Report 2000, www.iom.int

extranjeras, exportación y comunicación se coloca debajo del 1%, mientras que la participación del 20% más rico de la población mundial se encuentra entre el 70% y el 90%. El 70% de las inversiones a nivel global y el comercio mundial son controlados por las 200 compañías transnacionales más grandes. Este desarrollo encuentra su concreción estadística final en el promedio de la expectativa de vida: mientras ha aumentado en los 31 países más ricos del mundo entre 1975 y 1997, ha disminuido en 18 países del mundo durante el mismo período, específicamente en 10 países de África y 8 países de la antigua Unión Soviética o de Europa del Este. Los ejemplos más drásticos se encuentran en África donde el promedio de expectativa de vida decayó en Botswana de 52 a 47, en Zimbabwe de 51 a 44 y en Zambia de 47 a 40 años.¹⁰

La asimetría en la estructura de poder global se regula ante todo a través del endeudamiento de los países en desarrollo con respecto a actores estatales o no estatales del Norte. También aquí la dinámica de la pauperización se puede comprobar estadísticamente: mientras la deuda total de los países en vía de desarrollo del Sur se situaba bajo los 100 millardos de dólares para el año 1970, para 1998 había aumentado a 2.465 millardos de dólares. Considerando que sólo el servicio de la deuda generalmente devora entre un 30% y un 50% de su presupuesto de Estado, los países en desarrollo dependen continuamente de nuevos créditos, si desean mantener un mínimo de soberanía en actuación y planificación. Sin embargo, el bloque dominante de Estados y el Fondo Monetario Internacional controlado por el mismo, condicionan los nuevos créditos a «programas de ajuste estructural» que obligan a los Estados en desarrollo al desmantelamiento progresivo de sus estructuras de es-

10. El dramático descenso en la expectativa de vida en el Sur africano se debe en gran parte a la propagación del SIDA, que sólo puede ser analizada indirectamente como resultado de la globalización del posfordismo. A pesar de esta relevante salvedad, las cifras siguen siendo claras; a lo que habría que agregar además, que se ha registrado una disminución semejante del promedio de la expectativa de vida en los barrios de las grandes ciudades de Estados Unidos.

tado social, ya marginales de todas maneras, y al mismo tiempo, a la venta de los mejores sectores de sus economías nacionales a las compañías transnacionales.

En el marco de la división del trabajo globalizada y posfordista, la desvalorización o la subvaluación sistemática de la fuerza laboral alcanza finalmente también las metrópolis del Norte. Con ello, la diferencia entre metrópolis y periferias se desprende tendencialmente de la escisión territorial Norte-Sur o Este-Oeste, y se reproduce en forma desterritorializada entre los Estados y, dentro de ellos, entre las regiones estatales y supraestatales, entre la ciudad y el campo, en las ciudades mismas y finalmente entre los mismos individuos: en un apartheid social y mundial, que es a la vez menos claro y más pronunciado que nunca. El Cuarto Mundo de los totalmente marginados, una frontera que se encuentra en cualquiera de las regiones mundiales, sin embargo no representa algo exterior al capitalismo global sino que es, en efecto, su otro lado bárbaro. Al mismo tiempo es el espacio –que hay que entender como territorial solamente en forma limitada– en el cual realmente se puede hablar de “nuevas guerras”.

Economía de la guerra social

Debido a que el derrumbe de los países en vías de desarrollo en ningún otro lugar del mundo ha sido tan drástico como en África, la situación de sus países sirve como referencia central del discurso de las “nuevas guerras” y del periodismo vinculado al mismo. Los medios de comunicación masiva informan una y otra vez sobre inmensas limpiezas étnicas y masacres aparentemente sin motivos u objetivos en el marco de innumerables conflictos como en Angola, Etiopía, Eritrea, el Congo, Ruanda, Somalia, Sudán y Sierra Leona.

Estos hechos se explican con un modelo de análisis etnicista e incluso racista ampliamente difundido, según el cual diferentes grupos étnicos no «podían» unos con

otros dentro de la estrechez de un mismo Estado nacional, y por ello tarde o temprano deberían enfrentarse.

En realidad, la crisis africana no resultó de una violencia etnicista llegando a una explosión casi natural y del «desmoronamiento del Estado» causado por la misma: ambos fenómenos son, en sí mismos, más bien consecuencias de la historia particular de la descolonización de África, que nunca pudo cumplir en la realidad con su orientación ideológica de «desarrollo recuperador». Por ello, los países en desarrollo de África en ningún momento alcanzaron la soberanía de los países latinoamericanos. Por ejemplo, el ejército y la Policía desde un principio eran su esencia, y sus cuerpos oficiales procedían en gran parte de los aparatos coloniales de poder.

Alcanzada una independencia formal, la política de las elites estatales apuntó hacia la apropiación privada de los ingresos de la economía de exportación. También lograban ganancias extra a través del aprovechamiento metódico de las rivalidades estratégicas de la confrontación de bloques; los recursos así conseguidos beneficiaban a sus cuentas privadas y al aparato militar y de la Policía. Para crear un mínimo de legitimación política, establecieron un sistema clientelista basado en la pertenencia a clanes. Dado que casi no se implantaron otras instituciones estatales, las estructuras locales de la sociedad de clanes se mantenían como el único recurso fiable de confianza, justicia y seguridad social. En la medida que el Estado africano en desarrollo se mantuvo enfrente de la población propia como un partido que actuara sólo según los intereses particulares de las elites, que casi no podía sustentar en una lealtad de las masas establecida por instituciones del Estado social y de la sociedad civil.

Con el fin de la confrontación entre bloques y con la reestructuración posfordista de la división global del trabajo, este modelo de desarrollo se desplomó en sí mismo. En la lucha por los recursos restantes de sus países económicamente destruidos, las elites dominantes se dividieron y tomaron a los propios pueblos como re-

henes y a la vez como infantería de su competencia por la supervivencia. Cuando el Estado en desarrollo, en bancarota, suspende el pago de sueldos a los militares y la Policía, las tropas se abastecen merodeando a la población por medio de ataques, mientras algunos Señores de la Guerra establecen en sus regiones, en parte de manera abierta, regímenes de producción esclavista. Debido a que en muchos países africanos más de la mitad de los jóvenes no tienen sustento, ni las tropas regulares ni las irregulares necesitan preocuparse por la afluencia, el servicio en el ejército o en las bandas de los Señores de la Guerra constituye la única fuente de ingresos para gran parte de la población masculina, independientemente de si el sustento proviene del pago de sueldo o directamente del robo. Entre estos frentes más que complejos, los ejércitos privados de mercenarios pasan a desempeñar un papel cada vez más importante como un bando que opera por su propia cuenta.

Con la destrucción progresiva de las condiciones previas a la guerra, la usurpación rapaz de los medios de supervivencia, y con ello la de las mujeres, se convierte en la base de la reproducción social. Sin embargo, esto significa que en muchas sociedades africanas, la guerra ya no es una interrupción irregular de la reproducción más o menos pacífica de la vida social, sino que se ha convertido más bien en un economía regulada según sus propias leyes y orientada hacia su propia reproducción. A pesar de todas las diferencias –a menudo relevantes– entre los casos singulares, las economías de la guerra social son la verdad material de las “nuevas guerras” también en Asia y América Latina, en los “Estados en transformación” que una vez estuvieron dominados por el bloque soviético y –por último, pero no en menor grado de importancia– en las regiones en derrumbamiento de las metrópolis.

Su dinámica no está siempre determinada por enfrentamientos militares manifiestos; en muchos casos su forma violenta se mantiene en el nivel de bandas o de sistemas de gánsteres. Aquí se encuentran también en-

laces con la economía del crimen organizado y, naturalmente, con las diversas expresiones de la economía informal y de la economía de migración. El hecho de que estas economías no constituyan una excepción al capitalismo actual, que no estén “fuera” de él –sino que representen su lado bárbaro– se concreta en sus innumerables nexos con la economía mundial regular, y representa una variación del hecho válido para el capitalismo en general, de una combinación históricamente variante en forma continua de formas de producción capitalistas y no capitalistas.

El monopolio de poder imperial

Mientras el posfordismo del Sur globalizado culmina en las economías de la guerra social, el del Norte globalizado culmina en la actual Operación Libertad Duradera, llevada a cabo actualmente en Iraq. La interpretación generalizada de todos los bandos por medio de ideologías racistas, nacionalistas, etnicistas o incluso «fundamentalistas», no resulta tanto de lazos étnicos o religiosos obsoletos, si no más bien de la desvalorización profunda de ideologías socialistas en su sentido más amplio y de la debilidad simultánea de las ideologías liberales y democráticas en la transición del fordismo al posfordismo. Los desplazamientos del campo ideológico reflejan el fin del mito del «desarrollo recuperador» y, al mismo tiempo, la disolución de los compromisos de clases metropolitanos.

Por lo tanto, los Estados del Norte actúan como poderes hegemónicos más que dominantes del sistema mundial: si la hegemonía está basada en una lealtad de masas construida a través de la integración ideológica, la dominación se fundamenta sólo en la superioridad violenta, actualmente en la cualidad de ser invencibles, estructural de Estados Unidos.

A esto equivale que el proyecto ideológico de los poderes dominantes del posfordismo mire exclusivamente y de forma inmediata a la implantación e imposi-

ción de un monopolio imperial de violencia, es decir, un monopolio de violencia que recurre a un amplio «orden mundial». Este sistema está basado ante todo en los escenarios amenazantes de la «prevención de crisis», del «*management* de conflicto» y del antiterrorismo; y ya casi nada en las promesas de desarrollo, progreso y participación.

La Carta de este monopolio de violencia se encuentra en el «nuevo concepto estratégico» que fue elevado por la OTAN a estatuto de la Alianza, con motivo de su quincuagésimo aniversario en abril de 1999. En este concepto, los poderes dominantes parten de «riesgos militares y no militares muy diversos, que proceden de diversas direcciones y a menudo son difíciles de prever».

A éstos pertenecen «la incertidumbre y la inestabilidad en la región euro atlántica y sus alrededores, y la posibilidad de que se produzcan en la periferia de la Alianza crisis regionales (...). Las rivalidades étnicas y religiosas, los conflictos territoriales, la insuficiencia o el fracaso de los esfuerzos de reforma, los abusos contra los derechos humanos y la disolución de Estados (...). Los intereses de seguridad de la Alianza pueden verse afectados por riesgos distintos de carácter más general, en particular por actos de terrorismo, de sabotaje o de delincuencia organizada y por la perturbación del flujo de recursos vitales.

Asimismo, pueden plantear problemas para la seguridad y la estabilidad que afecten a la Alianza los grandes movimientos incontrolados de población, en particular los resultantes de los conflictos armados». En consecuencia, este escenario global amenazante demanda «capacidades militares eficaces en todas las circunstancias previsibles». ¹¹ Con ello, el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte –que limitaba la Alianza a la asistencia recíproca en el caso de un ataque militar en contra de una de las

11. El concepto estratégico de la OTAN, aprobado por los Jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la reunión del Consejo del Atlántico Norte celebrada en Washington los días 23 y 24 de abril de 1999, www.mde.es/mde/docs/tratados/concepto.pdf.

partes que conforman la Alianza— es nulo. Actualmente, las llamadas *non-article 5 missions* (Misiones no artículo 5) tienen el mismo rango que las misiones para la «defensa de la alianza», eso explícitamente también sin el apoyo de la ONU o la OSCE.

Así como esta amplia auto habilitación no puede ser interpretada en base a su propia explicación —como un deber de «intervención humanitaria» en nombre de los derechos humanos—, tampoco puede ser analizada solamente siguiendo la teoría clásica del imperialismo.

La Operación Libertad Duradera sigue como objetivo guía primario, aunque no como fin único, a un «imperialismo exclusionista de la seguridad». Su misión está resumida por Robert Kurz de la manera siguiente: «No se mira a la conquista y la incorporación para adueñarse de ciertos recursos (mucho menos humanos). Por el contrario, la orientación estratégica está dirigida a mantener a distancia del sistema la enorme y amenazante masificación de “supérfluos” en las periferias. Las catástrofes causadas por la misma economía universal de mercado deben permanecer “fuera”. Desde este punto de vista, las corrientes de refugiados tienen que ser detenidas antes de las fronteras orientales, y las regiones de derrumbe “pacificadas” en un nivel de miseria.

El objetivo implícito sólo puede consistir en una jerarquía de exclusión escalonada por continentes, que se extiende desde unos pocos países asociados a la OTAN y la Unión Europea (del tipo de Hungría), pasando por un cinturón de Estados sátrapas y de fachada (del tipo de Croacia), llegando hasta “protectorados” o *homelands* totalmente dependientes, administrados por organizaciones internacionales o guerras de bandas (por ejemplo, Kosovo); que a su vez conforman una jerarquía de pauperización».¹²

12. Robert Kurz, *Jungle World* 19 / 1999.

A eso corresponde en seguida la forma más policíaca que clásica militar de las guerras de ordenamiento mundial que siguieron a la Segunda Guerra del Golfo (1991) hasta la emprendida Tercera Guerra del Golfo, que se llevaron a cabo más bien siguiendo el ejemplo de un blitz, con el cual la Policía “reordena” un barrio dominado por gánsteres.

En una acción de este tipo no se trata de limpiar para siempre la zona afectada de los gánsteres, con el fin de llevar a sus habitantes orden, seguridad y civilidad a largo plazo. El objetivo consiste, ante todo, en contener a la población pauperizada en sus propios barrios, o sea el aislamiento territorial de las zonas residenciales de la clase media y alta –visto en el nivel mundial– de las regiones mundiales todavía prósperas. Al mismo tiempo, se trata de aclarar de forma manifiesta, quién es un ciudadano decente y quién un villano, así cómo determinar los límites entre lo que será tolerado y lo que no.

Que como consecuencia de las guerras extremadamente asimétricas la figura de los Señores de la Guerra se haya intensificado y que éstos estén directamente vinculados con el control imperial (como ha sucedido recientemente en Afganistán) no constituye una contradicción a lo anteriormente dicho: el monopolio imperial de la violencia sigue con el modelo de la funcionalización de la contraguerrilla en uso en las “guerras de suplentes”.

Lo mismo pasa en la paramilitarización intencional de los conflictos sociales como es el caso de Colombia, donde los “para” que actúan como Señores de la Guerra debieron, antes que todo, ser construidos por las elites locales y nacionales en cooperación con Estados Unidos, para poder manejar la rebelión social. La continuidad incontrolable en el tiempo, en casos particulares incluso el aumento de la pauperización, la privación de derechos y la violencia extrema son conscientemente aceptados porque se trata cada vez menos de eliminar en forma planificada el “subdesarrollo”, si no principalmente del

control de una población “excedente”, a la cual el sistema mundial ya no le tiene nada más que ofrecer.

Los Planes Marshall, que fueron creados igualmente para África, los Balcanes o el Mediano y Cercano Oriente, también están determinados por cálculos económicos concretos. Sin embargo, estos cálculos siguen solamente a los imperativos de aprovechamiento de un capital des-territorializado, que ya no puede frenar la dinámica posfordista de pauperización y exclusión, pues tiene a ésta como precondition estructural.

Ahora bien, la geopolítica global está ciertamente amenazada por escisiones internas, debido a las cuales se desmorona la unidad imperial de los poderes dominantes en una tríada conformada por Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Aunque Estados metrópolis dependen uno del otro para asegurar el dominio que sólo pueden imponer en conjunto, su interdependencia no anula su competencia interna. Pero ya no puede ser analizada sólo como una competencia inter-imperialista, sino al mismo tiempo y más específicamente como una competencia en el imperio. Si el primer concepto define las relaciones entre los diferentes aliados, en el último se disputa la forma de la implantación, imposición y ejecución del mismo monopolio imperial de violencia.

La discusión es sólo alrededor de si este tipo de intervenciones deben ser aprobadas multilateralmente o si también pueden ser implementadas unilateralmente por el líder, Estados Unidos, sin la aprobación de los aliados. Y también está en discusión hasta qué punto y qué elites árabes son integradas en la estructura imperial, y cómo deberá ser enfrentado el peligro objetivo de una revuelta panarábica-islamista de masas, que crecerá en la medida que se les escape de las manos a estas elites. Dejando por un lado los sucesos catastróficos posibles en cualquier momento –por ejemplo una guerra dentro del imperio,– todo indica que la administración de Bush fracasará a pesar de su superioridad militar; y que Estados Unidos y la Unión Europea acordarán una

política que cumpla más con las exigencias estructurales del imperio conjunto.

Los límites del imperio

Previo a la incursión de la maquinaria militar anglo-americana en Iraq se sucedieron protestas antibélicas en formas y dimensiones nunca antes vistas, donde participaron más de once millones de personas sólo durante el día de acción a nivel mundial (15 de febrero de 2003). Con ello pudo comprobarse, una vez más, que la oposición creciente desde mediados de los años noventa contra el posfordismo global no pudo ser doblegada por la demostración de poder imperial, que se había convertido en violencia material en el inmenso despliegue de tropas en el golfo. En cuanto la movilización para el Día Global Antigüerra tuvo sus orígenes en el Foro Social Europeo realizado en Florencia en noviembre de 2002, la alianza allí iniciada del llamado «movimiento crítico a la globalización» con el movimiento pacifista se manifestó realmente como una fuerza social de relevancia mundial. En este contexto, los y las manifestantes del 15 de febrero utilizaron el poder del que hoy disponen de ser el primer movimiento social de la historia que no tiene en la forma política de la Internacional su fin, sino su punto de partida.

A pesar de ello, el «movimiento de los movimientos» está muy lejos de poder cuestionar materialmente el orden mundial dominante. Esto se debe por un lado a que está enfrentado a una formación del capitalismo, que surgió de una amplia deslegitimación de todas las fuerzas de oposición anticapitalistas previas a ella y, por lo tanto, se ha fundamentado ideológicamente desde sus inicios sobre el mito de un «fin de la historia». El movimiento crítico a la globalización está esbozado en consecuencia por una extraña pérdida de experiencia, luego de que es familiar con la propia historia sólo según la interpretación de los supuestos vencedores. Éstos aprovechan la ventaja en la lucha ideológica confrontando de improviso el autoproclamado «fin de la historia» al

«choque de las civilizaciones», apoyándose justo en las condiciones que ellos mismos crearon.¹³

En una forma ideológicamente transformada, ambas metáforas, sin embargo, contienen el segundo y decisivo problema del movimiento antibélico crítico a la globalización. Este problema consiste en que la oposición contra la violenta «multiplicación y fragmentación» del sistema mundial sólo podrá convertirse en una lucha de liberación universal cuando ésta sea apoyada también y especialmente por la «población sobrante» pauperizada, que lucha dentro de las economías de la guerra social por su mera supervivencia. Por ello, la Internacional que se está creando actualmente encuentra su piedra de toque en la capacidad de poner en comunicación subjetividades políticas, que se forman dentro de realidades de vida extremadamente diferentes e incluso tendencialmente opuestas. Serán las resistencias del Sur global (como ya lo ha ejemplificado la irrompible autonomía de la migración) que determinan en mayor medida los objetivos y las formas de la lucha. La tarea para los movimientos sociales y las izquierdas políticas en los Estados de la tríada consiste en romper el consenso racista de las metrópolis que fue reforzado con el discurso de las “nuevas guerras”, según el cual el Norte global debe ocuparse de la implementación de la democracia, los derechos humanos y el civismo. La descolonización es y seguirá siendo una condición estructural previa a toda emancipación.

13. La obra de Francis Fukuyama *El fin de la Historia y el Último hombre* (México, 1992) exprime la autoestima de los vencedores frente al derrumbe de las izquierdas políticas del siglo XX; Samuel P. Huntington, *El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial* (Barcelona 1997) marca la línea cómo este fin debe mantenerse en pie en contra de ellos, que no lo quieren aceptar. Ambos libros delimitan el horizonte ideológico del posfordismo y forman así –con o sin proponérselo– el subtexto del discurso de las “nuevas guerras”.

II Colombia

Laboratorio experimental para el manejo privado de la guerra

Dario Azzellini

El surgimiento de actores no estatales armados y la creciente externalización de tareas estatales militares y represivas a empresarios de violencia privados es casi siempre considerado como debilitamiento del Estado. Colombia es una muestra ejemplar de que éste no debe ser necesariamente el caso. La imposición de los intereses estatales y del capital privado es transferida en forma controlada a las Corporaciones Militares Privadas (CMP) y a los paramilitares. Con ello no podría calificarse de ninguna manera a Colombia como un “Estado fallido”.

El país de cuarenta millones de personas fue considerado durante décadas como consejo confidencial para inversiones que traerían ganancias, y ha tenido las tasas de crecimiento más altas del continente latinoamericano hasta 1998. Colombia es rica en recursos naturales como petróleo, carbón, oro, esmeraldas, agua y biodiversidad (hoy en día interesante en el ámbito del aprovechamiento biotecnológico). Cuatrocientas de las quinientas empresas estadounidenses más grandes han invertido en este país. A esto se agrega el narcotráfico,

el factor de crecimiento más dinámico.¹⁴ Los grandes bancos perciben ganancias del lavado de dinero, y los consorcios químicos ganan de los productos base para la producción de cocaína.

Luego de una recesión entre 1998-1999 siguió rápidamente la recuperación. Una fuerte desvalorización del peso, la liberalización del tipo de cambio, un duro programa de austeridad y el ataque frontal a la legislación laboral permitieron un nuevo aumento de las exportaciones en un 13% en el año 2000. El nuevo presidente Álvaro Uribe Vélez intensificó la orientación neoliberal y así el *New York Times* destacó a Colombia a principios del año 2003 como uno de los seis «mercados emergentes» más interesantes a nivel mundial. Sin embargo, esta política precisa también una intensificación de la guerra.

Colombia constituye desde hace 20 años un laboratorio para la conducción privatizada de la guerra. Política, ejército, Policía, narcotráfico, ganaderos, paramilitares, ejército estadounidense, la agencia antidrogas norteamericana DEA, compañías transnacionales y CMP cooperan en constelaciones cambiantes para imponer sus intereses comunes en contra de las organizaciones campesinas, sindicatos, movimientos sociales y, ante todo, contra los continuamente crecientes movimientos insurgentes armados.¹⁵ La guerra se dirige en su mayor parte en contra de la población. Según la organización para los derechos humanos Codhes, 412.553 personas (20% más que en el año 2001) fueron desplazadas en Colombia durante el año 2002.¹⁶

14. Constituye, según la mayoría de las estimaciones, alrededor del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) y un porcentaje igualmente alto de la ocupación. Mucho menos que en Bolivia o Perú, aunque la riqueza acaparada durante los años se sitúa alrededor del 40% del patrimonio total en Colombia.

15. Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como la guerrilla más grande tiene alrededor de 20.000 combatientes armados, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que es más pequeño, tiene cerca de 12.000. A ellos se agregan algunas pequeñas agrupaciones con pocos centenares de armados.

16. *El Tiempo*, 28 de abril de 2003.

En total se calculan más de 2,5 millones de desplazados dentro del país. En el año 2002 se registraron 544 masacres con 2.447 muertos, 4.512 asesinatos políticos, 744 desaparecidos y 734 arrestos arbitrarios.¹⁷ No obstante, la mayor parte de la responsabilidad con respecto a las graves violaciones de los derechos humanos ya no se adjudica (como se hacía aún en los años ochenta) al ejército y los órganos de represión estatal, sino a los paramilitares.

En Colombia hay guerra desde hace más de cien años. Desde los años sesenta, ésta se disputa entre las guerrillas y los aparatos de poder de las elites, y ha sido particularmente intensiva en los últimos 12 años, en los que se ha internacionalizado el conflicto.

Más allá del Plan Colombia¹⁸ y otras medidas, desde el 2000 se inyectaron en el país más de 2,5 millardos de dólares en apoyo militar estadounidense para la presunta lucha contra el narcotráfico. Asimismo, las fuerzas de combate de Estados Unidos asumen un papel cada vez más activo *in situ*. Exploradores Awacs (Sistema Aero-transportado de Alerta y Control Tempranos) de la Fuerza Aérea estadounidense y estaciones de radar de dicho país en Colombia –que deberían servir para luchar contra el narcotráfico– transmiten informaciones sobre movimientos de la guerrilla desde marzo de 1999. Desde finales de 2001, el control se utiliza de manera oficial para la «lucha contra el terror». Al mismo tiempo, se anuló la restricción de la utilización de material bélico estadounidense en la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces se pueden encontrar instructores del ejército de Estados Unidos cada vez con mayor frecuencia. A esto se agrega unas 14 CMP, como mínimo, comisionadas por el Pentágono y por empresas privadas.

17. CPDH (Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos), "Décimo Foro Nacional de Derechos Humanos. Política de guerra al banquillo", *Voz*, Nro. 2185, 12 al 18 de marzo de 2003.

18. Un plan de más de 7,5 millones de dólares decretado a comienzos del año 2000 por el gobierno de Pastrana, 90% del cual consiste en ayuda militar o policíaca. Colombia pretendía reunir una gran parte por sí sola, y obtener otros fondos procedentes de países de la UE, ante todo para presuntos «componentes sociales».

Corporaciones militares privadas

El sector de los servicios de seguridad privados en Colombia debe contar aproximadamente¹⁹ con 160.000 empleados. Estas empresas están cada vez más integradas en las operaciones de guerra. Entre ellas se encuentran también empresas internacionales como las británicas Control Risk (consultas de prevención de riesgos, ex militares para la conducción de negociaciones, intentos de liberación en secuestros) y Global Risk (entrenamiento para liberación de rehenes, guardaespaldas, control técnico y armado). En el ámbito militar altamente calificado se encuentran empleados extranjeros *in situ* de las empresas Bell Helicopter Textron Inc., así como Sikorski Aircraft Corp (ambas de helicópteros de combate) y Lockheed-Martin (aviones militares). Estas empresas brindan apoyo al ejército en el cuidado, mantenimiento y manejo de las herramientas adquiridas.

Los empleados de las CMP ejercen de igual forma funciones de instructores, expertos en control, pilotos y grupos especiales para la Policía y los militares colombianos; y trabajan también para la DEA, los servicios secretos estadounidenses. En general se trata de antiguos miembros de unidades elite de Estados Unidos y ex militares de otros países, veteranos de guerra o militares activos norteamericanos que asumen misiones temporalmente limitadas durante sus vacaciones.

La utilización de CMP ofrece numerosas ventajas. Ya que éstas son delegadas y financiadas generalmente en forma directa desde Estados Unidos (por el Pentágono o los servicios secretos), instituciones gubernamentales colombianas declaran no estar informadas sobre sus actividades. Por otra parte, Estados Unidos tiene acceso directo a la zona de operaciones por medio de las CMP. A su vez, las instancias de control y una crítica opinión pública son mantenidas a distancia tanto en Colombia,

¹⁹ Restrepo Escobar, Orland, "Auge del negocio legal e ilegal de la seguridad privada en Colombia", *El Tiempo*, 15 de julio de 2002.

como en Estados Unidos. De ese modo se puede eludir el tope establecido por el Congreso de Estados Unidos para las fuerzas de acción en Colombia que anteriormente estaba en 400 civiles y 400 militares, cantidad que aumentó el 9 de octubre de 2004 a 600 y 800, ya que las CMP sencillamente contratan personal proveniente de otros países.²⁰ Algunos analistas calculaban ya hace unos años que la cantidad de empleados extranjeros de las CMP en Colombia es más de 1.000.²¹ Actualmente son alrededor de 2.000.

California Microwave Inc.

La California Microwave Inc. ofrece servicios militares y de espionaje en el ámbito de la telecomunicación y el control aéreo. Constituye una filial de la Northrop Grumman Inc. que dirige cinco estaciones de radar para el control del espacio aéreo con una cantidad desconocida de empleados de Estados Unidos en el oriente y el sur de Colombia.

El 13 de febrero de 2003, unidades de las FARC derribaron una avioneta Cessna 208 en el departamento de Florencia, región de Caquetá, que realizó vuelos de inspección en la zona de la guerrilla para dar cuenta a los militares de los movimientos y paradero del Frente 15 de las FARC y sus comandantes. A la tripulación pertenecía un miembro colombiano del servicio secreto y cuatro empleados estadounidenses de la CMP California Microwave Inc., reclutados por la Oficina de Administración Regional (Office of Regional Administration) de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, una dirección fingida de la CIA. Tanto el colombiano como uno de los norteamericanos fueron encontrados asesinados, los

20. El tope máximo de los militares de Estados Unidos ha sido aumentado a 500 en mayo de 2004, mientras se está discutiendo eliminar totalmente el tope máximo de civiles contratados por CMP.

21. Flórez, Sandra Bibiana, "Mercenarios en Colombia: una guerra ajena", en *Proceso* Nro. 1291, 29 de julio de 2001.

tres norteamericanos restantes se encuentran en manos de las FARC.

En vista de lo anterior, el gobierno estadounidense envió 50 soldados elite a Colombia que deben prestar apoyo en la investigación y logística al ejército colombiano en la búsqueda de «los secuestrados y sus secuestradores». Ante la interpelación del *Washington Post* en cuanto a su posible participación en las acciones de liberación, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores contestó: «tendríamos la capacidad de hacerlo». Eso rompería el límite del congreso, que incluye que las tropas estadounidenses no deben participar en operaciones militares.

Con el envío se transgredió de igual forma el tope antes mencionado. Aunque según las declaraciones de George Bush en total son sólo realmente 208, el mismo *Washington Post* habla de 411 soldados norteamericanos.²² Sin embargo, hasta finales de octubre de 2004 el gobierno de Estados Unidos no tenía ninguna pista de los prisioneros.

DynCorp²³

La CMP con más personal en la guerra colombiana es la DynCorp, que también participa en las fumigaciones de cultivos de droga. Para ello tienen a su disposición 88 helicópteros y avionetas del gobierno estadounidense. La misma empresa estadounidense oculta la cifra total de sus empleados en el país. Otras fuentes mencionan la cifra de 100 hasta 355, de los cuales menos que un tercio serían ciudadanos norteamericanos. Un ex empleado declaró: «cuando yo trabajaba allí, nuestra cifra aumentó

22. La cantidad total es probablemente mucho mayor. Así, desde enero de 2003 existen de manera oficial 70 soldados norteamericanos de los Green Berrets en la región petrolera de Arauca. No obstante, según lo expresado por Jaime Caicedo (presidente del PC colombiano) en entrevista personal de fecha abril de 2003, se contabilizaron unos 400 soldados norteamericanos uniformados en el lugar.

23. Como referencia, véase el artículo de D. Drüssel incluido en este libro.

de 120 a 450».²⁴ Los ingresos de la DynCorp aumentaron de 6,6 millones de dólares en 1996 a 30-40 millones anuales a partir del 1999. Desde 1991, la empresa ha obtenido más de 300 millones de dólares en el marco de la campaña militar de Estados Unidos contra el narcotráfico en Latinoamérica.

La sede principal de las operaciones andinas de la DynCorp se encuentra en la Patrick Air Force Base (base de la fuerza aérea Patrick) en Florida. Allí se pone a prueba a aquellos aspirantes que se hayan presentado por los anuncios en la prensa y se distribuye el programa Colar (Colombian Army o Ejército Colombiano) y Helas (Helicopter Assimilation-UH-IN o Asimilación de Helicópteros UH-IN). No son pocos los que se postulan; después de todo, un piloto en la guerra de Colombia gana entre 75.000 y 90.000 dólares anuales.²⁵

La sede principal de la DynCorp en Colombia se encuentra en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, otras ocho bases militares hacen las veces de «Puntos Operativos de Protección Delantera» (FOL en inglés). Según el contrato, la DynCorp emplaza pilotos y mecánicos, y lleva a cabo entrenamiento de pilotos, vuelos de inspección y transporte de tropas para la destrucción de áreas de cultivo y laboratorios de droga. Miembros de la DynCorp se hallan en los aviones de inspección OV-10 D (Broncos) en Colombia, vuelan las aeronaves de fumigación T-65 y acompañan las operaciones mixtas con la Policía colombiana con grupos especiales en helicópteros. Estos Grupos de Búsqueda y Rescate (Search and Rescue Teams, SAR) están compuestos a menudo por ex soldados de elite del ejército estadounidense y se les encomienda la evacuación de personal militar en situaciones de peligro, oficialmente sólo en la «guerra anti-droga». No obstante, un veterano de la DynCorp informó que son empleados de igual forma en misiones de com-

24. Vest, Jasón, "States Outsources Secret War", en *The Nation*, 4 de junio de 2002.

25. En EE UU en los riegos en la agricultura ganan sólo 40.000 dólares.

bate contra la guerrilla.²⁶ Un piloto de nacionalidad peruana de la DynCorp declaró: «Yo fui mercenario en Colombia, porque era un trabajo a sueldo, para librar una guerra que no es mía (...). Se trataba de una operación típica militar (...) normalmente nos contratan para operaciones comerciales, pero cuando trabajamos para el ejército de Colombia, la cosa es otra».²⁷

En las fumigaciones de cultivos de droga los límites con las operaciones militares son más bien fluidos. Para protección, se dispara la zona con ametralladoras desde el helicóptero en avanzadas que, acto seguido, acompañan a las misiones con piezas armadas de artillería,²⁸ ya que la guerrilla busca proteger a los pequeños agricultores de coca de las fumigaciones, pues éstas son parte de la guerra. Las fumigaciones destruyen todo tipo de cultivos y causan daños severos y enfermedades, llegando hasta la muerte de campesinos y su ganado. Incluso se fumigaron regiones sin cultivos de coca.

La DynCorp niega una participación en operaciones de combate, pese a que ésta se hizo evidente cuando, el 18 de febrero de 2001, las FARC derribaron a balazos un helicóptero de la Policía que acompañaba a una fumigación en Caquetá, al Suroeste de Colombia. Después de un aterrizaje de emergencia, un grupo SAR de la DynCorp evacuó al piloto y a sus acompañantes. Los cuatro salvadores estadounidenses armados con ametralladoras M-16 libraron combates con la guerrilla, y otros dos helicópteros con personal estadounidense dieron fuego de cobertura. El piloto de la DynCorp evacuado del helicóptero de la Policía derribado —que tampoco era colombiano— y otro miembro de la tripulación usaron pistolas y un lanzagranadas. Por lo menos ocho «evacuaciones calientes» fueron supuestamente efectuadas por los grupos SAR en los últimos seis años.

26. Jason 2002.

27. Flórez 2001.

28. Ídem.

Violencia privatizada al servicio de las compañías transnacionales

Ya que las Compañías Transnacionales (CTNs) necesitan «seguridad de inversión», éstas trabajan (en situaciones de guerra) en conjunto con las Fuerzas Armadas para proteger sus plantas e intervenir directamente en la guerra. Además, la utilización de grupos paramilitares al servicio de intereses capitalistas particulares es también común en Colombia. Más de 2.000 sindicalistas han sido asesinados durante los últimos 15 años. El jefe paramilitar Carlos Castaño admite francamente: «Asesinamos a los sindicalistas porque no dejan trabajar a la gente».

El primer caso conocido es el de la participación de la empresa petrolera Texaco en la organización de grupos paramilitares en la zona de Puerto Boyacá a partir de 1983. Las empresas bananeras multinacionales en la región de Urabá lograron acabar con todo el trabajo sindical en las plantaciones asesinando a más de 400 sindicalistas por medio de paramilitares entre fines de los ochenta hasta mediados de los noventa. A principio de la década de los noventa, los sindicatos acusaron a la CTN suiza Nestlé de haberse servido de paramilitares para liquidar a sus representantes en las negociaciones por el contrato colectivo. La misma acusación fue levantada también en contra de Drummond Coal (la más grande compañía minera activa en el país) que en el año 2003 exportó 14 millones de toneladas de carbón.²⁹ Se acusa a la multinacional estadounidense de «haber suministrado dinero, víveres, combustible, armamento y tierras para cuarteles a los paramilitares de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). A cambio de ello, la AUC ejerce una violencia extrema, tortura y asesina a sindicalistas para evitar que éstos operen en estas empresas».³⁰ El 14 de abril de 2003 se admitió una demanda presentada por la Funda-

29. Colombia es el cuarto exportador mundial de carbón y exporta entre 30 a 40 millones de toneladas anuales, con un valor total de 990 millones de dólares en el año 2002.

30. En una carta del senador estadounidense Patrick Leahy al secretario general de justicia John Ashcroft en marzo de 2003.

ción Internacional para los Derechos Laborales (*International Labour Rights Foundation*) en nombre del sindicato de mineros y familiares de los asesinados ante una corte laboral en Alabama, Estados Unidos. La corte se refirió a los paramilitares como «actores estatales».³¹

Oxy, AirScan y el ejército de Estados Unidos

Siendo el quinto proveedor de petróleo más grande de Estados Unidos, Colombia adquiere un papel importante en la política exterior de Washington. La corporación privada estadounidense de servicios secretos Stratfor afirmó a fines de 2002 «que la mayor prioridad para el gobierno de Bush es la protección de las regiones petroleras de Colombia (...) y la seguridad de otras regiones rurales en donde se presume la existencia de yacimientos de crudo, para que así las empresas estadounidenses puedan iniciar sus perforaciones de exploración bajo condiciones seguras».³²

Un 20% del petróleo colombiano es extraído en el campo petrolero Caño Limón ubicado en el departamento de Arauca, al nororiente en la frontera con Venezuela, y es bombeado a través de un oleoducto cientos de kilómetros hacia el puerto caribeño de Coveñas. La mitad de esta cantidad va hacia Estados Unidos. Las empresas que manejan los pozos y el oleoducto son la multinacional estadounidense Oxy y la colombiana Ecopetrol. Allí se encuentra también el territorio reconocido de los indígenas U'Wa que se han resistido durante una década a las perforaciones exploradoras de la Oxy, quien los oprime por medio del ejército colombiano y los paramilitares.

31. La demanda es por «conspiración con paramilitares» relativa al asesinato en marzo de 2001 del presidente y el vicepresidente del sindicato, y seis meses después del nuevo presidente.

32. El petróleo es el principal objetivo de Estados Unidos en Colombia, según agencia de información en *El Tiempo*, 30 de octubre de 2002.

Debido a que el oleoducto durante los últimos años ha sido sabotado por medio de cientos de atentados de la guerrilla, el gobierno estadounidense concedió 88 millones de dólares para su protección militar en el año 2003: más helicópteros de guerra para la XIII Brigada del ejército, construcciones de búnkeres y la capacitación de tropas colombianas por parte del ejército de Estados Unidos. Para el año 2004 se tienen previstos 110 millones de dólares en apoyo militar para la protección. Una subvención de casi tres dólares por cada barril de petróleo-Oxy.

La vigilancia de los campos de extracción y del oleoducto le corresponde a la CMP AirScan de Florida. Sus equipos de trabajo vuelan Cessnas 337 (Skymaster) con cámaras de vigilancia de video y de infrarrojo, e informan al ejército sobre presencia y movimientos guerrilleros. Pilotos que han trabajado en eso informan que han «operado frecuentemente como apoyo secreto a las patrullas antiguerrilla y han seleccionado objetivos militares, incluso celebraban muertes si un piloto de la aviación militar volaba exitosamente una unidad de la guerrilla». ³³ El 18 de diciembre de 1998, varios helicópteros de la aviación colombiana atacaron a presuntas unidades de las FARC, ubicadas en Santo Domingo a unos 50 kilómetros de distancia del oleoducto. Dieciocho habitantes del pueblo, entre ellos siete niños, murieron bajo el fuego de las ametralladoras o fueron acribillados por las bombas-racimo. El ejército responsabilizó a las FARC por este hecho.

En mayo de 2000, una investigación del FBI confirmó la utilización de una bomba racimo estadounidense y la tripulación del helicóptero fue inculpada por múltiple asesinato. El piloto colombiano y su copiloto reconocieron haber lanzado las bombas, sin embargo, los objetivos habrían sido establecidos por AirScan. ³⁴

33. Miller, Y. Christian "A Colombian Village Caught in a Cross-Fire", en *Los Angeles Times*, 17 de marzo de 2002.

34. Penhaul, Karl "Colombia: Americans Blamed in Raid", en *San Francisco Chronicle*, 15 de julio de 2001.

A causa de que en el video de la misión faltaba la pista sonora y los paramilitares asesinaron al testigo más importante (que estaba dispuesto a declarar en contra del ejército), las investigaciones casi no avanzaron. E incluso cuando el diario colombiano *El Tiempo* publicó el 25 de enero de 2003 una transcripción de la reaparecida banda sonora que ratificaba las declaraciones de los pilotos colombianos, no se interrogó ni a los tres pilotos estadounidenses ni a los empleados de AirScan.

La Oxy apoyó la operación de manera decisiva en la medida en que «facilitó el transporte de tropas, la cooperación en la planificación y el combustible para la aviación colombiana, e inclusive para la tripulación del helicóptero inculpada en el bombardeo».³⁵ Los aviones de AirScan y los helicópteros de combate despegan y aterrizan en el campo petrolero de Caño Limón. Allí se encuentra también la base de acción equipada técnicamente por la Oxy, en la cual los pilotos de la AirScan en la respectiva mañana mostraron a los militares la grabación en video del primer vuelo de reconocimiento.³⁶

También en otras ocasiones el apoyo de la Oxy al ejército resultó generoso. La Oxy y sus filiales pusieron a disposición de la XVIII Brigada militar helicópteros para el transporte de tropas, combustible, uniformes, autos y motocicletas. Esa brigada es tristemente célebre por ajusticiamientos extralegales, graves violaciones de los derechos humanos e indolencia con respecto a los paramilitares.

La Oxy financia incluso un mejor abastecimiento de la unidad para reforzar la moral de la tropa. También dinero en efectivo, casi 150.000 dólares anuales, en total un apoyo de más de 750.000 dólares al año. No obstante, la Oxy declara que en el momento del bombardeo «no tenía nexos contractuales con los pilotos o el avión». Esto es cierto en el sentido formal, pues aunque Oxy financia

35. Miller, 2002.

36. Ídem.

el avión Skymaster, la CMP ya no lo costea directamente. Ahora la compañía asociada Ecopetrol paga a la aviación militar colombiana, que a su vez cancela a AirScan.³⁷

British Petroleum y DSL

La British Petroleum (BP) explota los campos petroleros de Cusiana en el oriente de Colombia, y tiene participación determinante en el consorcio Ocesa que maneja el oleoducto de 800 kilómetros de largo que va desde Cusiana hasta el puerto de Coveñas. La BP y Ocesa comisionaron a comienzos de los años noventa la Defense System Colombia (DSC - Sistema de defensa Colombia), una empresa –hija de la británica Defense System Ltd (DSL)–, con la seguridad de los campos de extracción y del oleoducto durante la construcción y posterior a ella. La BP se preocupaba tanto por los atentados del ELN como también por la central obrera izquierdista y fuerte Unión Sindical Obrera (USO).

Para el DSC, el ex oficial del servicio secreto británico Roger Brown, asumió el lineamiento de las medidas de seguridad. Brown adquirió en 1997 armas para el ejército –financiadas por Ocesa– a través de la empresa de seguridad israelí Silver Shadow, que también participó en la elaboración del concepto de seguridad. Se trató de equipo sofisticado para la guerra antiguerrilla, entre otros tecnología de vigilancia y vehículos aéreos no tripulados para inspección. Aparte de lo anterior, se entrenaron unidades policíacas y del ejército en tácticas de la lucha contrainsurgente y guerra psicológica.

Amnistía Internacional manifiesta lo siguiente: «Lo que es especialmente alarmante es que DSC/Ocesa haya comprado material militar para la XIV Brigada del ejército colombiano, que tiene un historial atroz de violaciones de derechos humanos». En ese momento había una investigación en contra de la brigada del ejército

37. Penhaul, 2001.

por complicidad en una masacre de 15 civiles y conexiones con los paramilitares. Amnistía también calificó como preocupante la relación con empresas de seguridad israelíes, «dado que en el pasado esas empresas han proporcionado mercenarios de nacionalidad israelí, británica y alemana para adiestrar a organizaciones paramilitares que actúan bajo el control de la XIV Brigada». Los mismos paramilitares eran responsables ya durante la construcción del oleoducto de la muerte de 140 personas sólo en la región alrededor de Segovia. Este hecho afectó principalmente a activistas de organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como también a comité local para los derechos humanos en su conjunto.

Amnistía tiene una explicación para eso, pues la estrategia para la seguridad del DSC se apoya «en informantes muy bien pagados cuya misión es reunir de forma encubierta “información secreta” sobre las actividades de la población local de las comunidades por las que pasa el oleoducto e identificar a posibles “subversivos” dentro de esas comunidades», afirmó Amnistía Internacional. Aún más preocupante es que esta información secreta es, según informes, transmitida después por Ocesa a los militares colombianos que, junto con sus aliados paramilitares, han elegido frecuentemente a los considerados subversivos como víctimas de ejecución extrajudicial y «desaparición».³⁸

Cuando el negocio de las armas salió a la luz pública en 1997, la Ocesa no extendió el contrato con el DSC, y Brown tuvo que renunciar a su cargo en la DSC. Sin embargo, en su lugar llegó el general colombiano inactivo Hernán Guzmán Rodríguez, que supuestamente fue responsable de un grupo paramilitar que perpetró 149 asesinatos entre 1987 y 1990. Asimismo, la BP extendió el contrato con el DSC.

38. Amnesty International, “Amnesty International Renews calls to Oil Companies operating in Colombia to respect human rights”, AI Index: AMR 23/79/98, 19 de octubre de 1998.

En octubre de 1998 el Parlamento de la UE aprobó una resolución en la que se condenaba el financiamiento de escuadrones de la muerte por parte de la BP. El sindicato USO, que es regularmente objetivo de asesinatos paramilitares y de acusaciones jurídicas, sigue denunciando acciones de espionaje en su contra.

Coca-Cola y las AUC

«En Coca Cola una y otra vez durante los últimos años ha habido abusos contra trabajadores organizados sindicalmente. Los métodos van desde intimidaciones, secuestros y torturas hasta la muerte. En una celebración donde había mucho alcohol en 1996, Mario Mosquera, gerente de la empresa Panamco (la embotelladora colombiana de la Coca Cola) en Carepa anunció a voz en grito que acabaría con el sindicato con ayuda de los paramilitares. Desde entonces se han asesinado en Carepa a varios activistas sindicales y los paramilitares se movilizan sin ser molestados por las áreas de la empresa»,³⁹ según las afirmaciones de un activista del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, Sinaltrainal.

Asimismo, los paramilitares de la AUC entran y salen de la empresa embotelladora de Panamco en Bancabermeja, y dejan cartas amenazadoras a sindicalistas activos. Esto sucede bajo el encubrimiento de la gerencia local. Cuando la AUC protestó en el año 2001 contra la desmilitarización de la región y las conversaciones con el ELN por medio de bloqueos de carreteras, Coca Cola suministró las bebidas a los manifestantes.

Con ayuda de los paramilitares se agilizaron también los procesos de desregulación, como describe en forma impresionante un miembro de Sinaltrainal: «A principios de los años noventa trabajaban en las sucursales de

³⁹ Azzellini, Dario, "Kolumbien: 150 Dollar Monatslohn statt 600", *Interview mit einem Coca Cola Gewerkschafter*, Mai 2002, <http://www.labournet.de/internationales/co/cc-dario.html>.

la Coca Cola de Colombia más de 10.000 trabajadores aproximadamente, todos disponían de contratos ilimitados y de un ingreso promedio de 600 a 700 dólares. Actualmente, luego de una reestructuración fundamental de la empresa, sólo unos 2.500 trabajadores mantienen contratos con Coca Cola y apenas 500 de esos contratos son fijos, los 7.500 restantes son empleados por las filiales. Su ingreso mensual promedio es de sólo unos 150 dólares. Las anteriormente buenas condiciones laborales de Coca Cola en comparación con otras empresas colombianas, en sólo 10 años cambiaron todas a peor. Para imponer esto debió ser desmantelado el movimiento sindicalista, entre otros, que combatía esas condiciones y la reestructuración planteada. Durante dos huelgas en 1995 y 1996 fueron asesinados siete de nuestros líderes sindicales de la Coca Cola en Colombia, más de 50 debieron abandonar sus regiones y más de 6.000 de los 10.000 empleados totales han sido intercambiados en el transcurso de la década pasada. El número de nuestros miembros en Coca Cola disminuyó de los 2.500 anteriores a unos 500». ⁴⁰

El 31 de agosto de 2002, fue asesinado un sindicalista de la Coca Cola: Adolfo de Jesús Múnera López vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) en la región del Atlántico y que ejercía funciones de suplencia en Sinaltrainal. Durante años, fue vejado y amenazado. En 1997, el ejército derribó su casa, tuvo que huir y fue despedido por no presentarse a su lugar de trabajo. Tras un procedimiento judicial con varias instancias, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció por un deber de readmisión. Diez días después Múnera fue asesinado a tiros por los paramilitares.

El 30 de marzo de 2003 fue admitida una demanda de Sinaltrainal contra la empresa embotelladora latinoamericana Panamericana Beverages Inc. y la colombiana

40. Azzellini, 2002.

Panamco y Bebidas y Alimentos ante una corte federal estadounidense en Miami. El sindicato quiere ahora extender la demanda a la empresa madre Coca Cola. Ésta y sus empresas embotelladoras, según la demanda, utilizan grupos paramilitares para evitar el trabajo sindical y desmantelar los sindicatos.

Paracos, mercenarios y empresas de armas

Entre los paramilitares se encuentran igualmente numerosas conexiones con empresas de mercenarios y de armas. En abril de 2002 se conoció que GIR S.A, una empresa filial de la estatal Israel Military Industries Ltd. (IMI) con sede en Guatemala, había proporcionado 3.117 fusiles de asalto AK-47 (Kalashnikov) y 2,5 millones de cartuchos a los paramilitares a fines de 2001.⁴¹

Ya en 1988 la IMI había suministrado 500 fusiles automáticos al cartel de Medellín, que entonces participaba en la construcción de grupos paramilitares. El papel central lo desempeñaba el mercenario israelí y comerciante de armas Yair Klein (y su empresa Spearhead Ltd.), quien formó también a la contra nicaragüense en Honduras en los años ochenta. Klein, reservista del ejército israelí, fue condenado en Israel por exportación ilegal de armas hacia Colombia en 1991. Klein llegó a este país en 1986 por iniciativa de la asociación empresarial Uniban (Unión de Bananeros). Según la fiscalía colombiana Uniban contactó con Ytzhak Maerot Shoshani, que vendía armas al Ministerio de la Defensa colombiano como representante de una empresa israelí de armamento. Shoshani se puso en contacto con Yair Klein, que entró a Colombia con ayuda estatal y su paso de frontera no fue registrado en el aeropuerto. Klein formó entre otros a los paramilitares que cometieron varias masacres en plantaciones de bananos en marzo de 1988. Un testigo

41. Tercero, Eduardo Marengo, "Militares incas en radar antiterrorista de Estados Unidos", en *La Prensa*, Managua, 23 de enero de 2003.

declaró que los mercenarios alrededor de Klein habían recibido por parte de Uniban y algunos narcotraficantes 800.000 dólares por su trabajo.

Paramilitares como brazo armado de las elites

Los paramilitares están organizados a nivel nacional en su mayoría en la organización central AUC y comprenden más de 13.000 armados. Este ejército ilegal, cuyos y cuyas combatientes cobran un salario mensual de ensueño para Colombia, 500 dólares, es financiado en un 70% por el narcotráfico,⁴² y a ello se agregan pagos de diversas compañías. El objetivo primario de los paramilitares es la destrucción física de cualquier oposición. Así la Unión Patriótica (alianza electoral socialista fundada con la participación del Partido Comunista) perdió en casi 13 años unos 4.000 miembros o asesinados por los paramilitares.

Los paramilitares evitan combates directos con la guerrilla. Sus ataques son dirigidos principalmente a civiles desarmados, campesinos, sindicalistas, activistas de los derechos humanos, miembros de partidos y organizaciones de izquierda, en fin, todas las iniciativas de autoorganización y bajo el concepto sintomático de «limpieza social» también atacan a pequeños criminales, indigentes, niños de la calle, homosexuales, trabajadoras del sexo y artistas callejeros entre otros. Para sembrar el terror, los paramilitares actúan con la violencia más extrema, torturan a sus víctimas y muchas veces las descuartizan vivas con motosierras. Al mismo tiempo obligan al

42. La guerrilla también es inculpada de narcotráfico, aunque esto obedece básicamente a la legitimación de la guerra. El ELN rehúsa cualquier conexión con el narcotráfico. Las FARC se han «involucrado» en la producción de coca y grava la compra de ésta y de su pasta en las zonas bajo su control. Incluso el jefe de la DEA Donnie Marshall debió admitir en octubre de 2001: «No existen pruebas de que alguna unidad de las FARC o del ELN haya establecido redes internacionales para el transporte, para la preparación de grandes cantidades de drogas, o sistemas de lavado de dinero por el narcotráfico en Estados Unidos o Europa» Sánchez, Álvaro, "Kolumbien: Gewalt Drogen und Paramilitärs", Manuscrito, sin año».

resto de la comunidad a observar estos atropellos y prohíben bajo amenaza de muerte enterrar los cuerpos.

Los paramilitares son el comodín en la imposición de los intereses de la oligarquía, militares, gobierno, narcotráfico y compañías transnacionales, quienes no existirían sin su protección. Los paramilitares no poseen un programa político a excepción de la defensa de las estructuras de poder existentes y los intereses de la economía privada. O como lo expresó el dirigente paramilitar Carlos Castaño en una entrevista con Radio Caracol el 4 de febrero de 2003: «Nosotros respetamos la propiedad privada, respetamos las inversiones extranjeras, respetamos la economía nacional».

El terror a los paramilitares y la necesidad de los narco empresarios del lavado de dinero –luego de la apertura de mercados– han promovido la agroindustria orientada hacia la exportación y otras florecientes ramas económicas. Una verdadera contrarreforma agraria fue encauzada por el desplazamiento y el robo. La oficina de Naciones Unidas para el control de las drogas y la prevención del crimen estima que los narco empresarios se han apropiado de 44.000 kilómetros de tierras, casi el 40% de las áreas cultivables de Colombia.

Frecuentemente la población es expulsada de las regiones donde se han planificado sus mega proyectos. Por una parte eso facilita los trabajos previstos, y por otra, las tierras robadas ofrecen ganancias especulativas de ensueño. De esta forma, la familia Castaño es propietaria de unos 1,2 millones de hectáreas de tierras en el municipio de Valencia, a unos 30 kilómetros donde empezó la construcción de la hidroeléctrica del Urrá en 1997 y donde eventualmente se hará una conexión interoceánica para unir con una vía de transporte el Pacífico y el Atlántico.

Los orígenes de los paramilitares se remontan a mucho tiempo atrás. En algunas regiones funcionaron desde los años cincuenta como brazo armado de las elites locales y regionales.

A partir del comienzo de los años sesenta, se formó a la Policía y al ejército en conformidad con la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos y la conducción de la guerra de baja intensidad. En esta estrategia, con el «comunismo» y la «subversión», el «enemigo interno» está en el centro de interés. Así durante los años sesenta se promulgaron decretos y leyes que le dieron una base legal al establecimiento de «grupos de autodefensa». El ejército y la Policía comenzaron a entrenar y a armar grupos en las zonas de conflicto con la intención de involucrar más a la población en los enfrentamientos y apoyar a los órganos de seguridad del Estado.

A mediados de los años setenta se originaron los escuadrones de la muerte dirigidos directamente por el ejército, así como la Alianza Anticomunista Americana (AAA), que llevó a cabo atentados con bombas, secuestros y asesinatos de representantes de izquierda. La AAA fue fundada por el ex comandante general del ejército Harold Bedoya Pizarro. Bedoya, exagregado militar de la Embajada colombiana en Estados Unidos, alumno de la escuela militar estadounidense School of Americas en Fort Benning (Georgia) y más tarde empleado en la misma como instructor, estuvo envuelto durante toda su carrera en actividades paramilitares y graves violaciones de los derechos humanos, sin haber sido nunca demandado por ello. Junto a él participaba también Iván Ramírez, quien investigaba a fines de los noventa una división de la fiscalía general por sus conexiones con los paramilitares y con la CIA.

Los grupos de la región Valle del Cauca formaron la base sobre la cual se crearon los escuadrones de la muerte en Puerto Boyacá desde 1980-1981, que velaban por los intereses del poder político local, algunos empresarios del Magdalena Medio, de la Texas Petroleum Company y los narcotraficantes de Medellín. Uno de los primeros grupos es el MAS (Muerte a los Secuestradores). 59 de sus 163 integrantes eran militares, según declaraciones del fiscal general Carlos Jiménez Gómez. El

narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha cooptó finalmente al MAS y exportó el modelo a otras regiones.

«En su anticomunismo galopante y con el apoyo de sectores de la Fuerza Pública y del narcotráfico, Gonzalo Rodríguez Gacha y Jairo Correa, extienden el dominio del grupo de Boyacá a otros municipios principalmente, durante el período 1985 a 1987. A partir de ahí la expansión se dará hacia el Nordeste antioqueño: Córdoba, Urabá, Bajo Cauca antioqueño con el apoyo de Fidel Castaño, con el beneplácito y la colaboración de múltiples ganaderos, así como de industriales del narcotráfico», según describe el proceso la organización de derechos humanos Indepaz.⁴³

El paramilitarismo siguió extendiéndose hasta 1990. La muerte de Rodríguez Gacha en 1989 y los conflictos internos en el cartel de Medellín entre Pablo Escobar y Fidel Castaño (apoyado por otros capos) debilitaron estos esfuerzos entre 1990 y 1993. Sin embargo, los paramilitares y los narcotraficantes encontraron nuevos aliados: la DEA, la CIA, y la NSA (National Security Agency o Agencia de Seguridad Nacional)

Estados Unidos comenzó en 1992 a cooperar en una operación de 15 meses por parte de la Policía colombiana para el apresamiento de Pablo Escobar,⁴⁴ que culminó en diciembre de 1993 con su muerte. Y contribuyeron con la formación, capacitación y apoyo de una unidad especial de la Policía, el Bloque de Búsqueda, que sostuvo estrechas relaciones con el grupo paramilitar «Los Pepes» (perseguidos por Pablo Escobar), que apareció a partir de febrero de 1993. Fue fundado por miembros del cartel de Cali y los adversarios de Escobar, entre

43. Centro de Documentación de Indepaz, "Antecedentes de las Autodefensas Unidas de Colombia", en: *Boletín de Indepaz*, Nr. 13, febrero de 2003. Fidel es el hermano de Carlos Castaño y presuntamente resultó muerto hace unos años.

44. P. Escobar no estaba aliado con la oligarquía colombiana y no quería someterse a la estrategia estadounidense. El contexto general no puede ser ilustrado con mayor precisión aquí.

ellos Alberto Uribe Sierra, padre del actual presidente, para luchar contra Escobar.⁴⁵

Ya desde 1993 el fiscal general Gustavo de Greiff presentó pruebas a Estados Unidos de que diferentes altos oficiales del Bloque de Búsqueda trabajaban estrechamente en conjunto con Los Pepes. Las pruebas hubieran sido suficientes para acusarlos por corrupción, narcotráfico, tortura, secuestro y quizá también asesinato, sin embargo no fue así. Joe Toft, entonces jefe de la DEA en Bogotá, se expresó muy claramente en un documento del 3 de agosto de 1993: «El testimonio de los testigos indica que algunos miembros del Bloque y de Los Pepes, no sólo estaban llevando a cabo operaciones conjuntas, algunas de las cuales resultaron en secuestros y posibles asesinatos, sino que eran más bien los jefes de Los Pepes los que ordenaban los disparos y no la Policía». En otro informe de la DEA de 22 de febrero de 1993, el agente Javier Peña describe una redada del Bloque de Búsqueda guiada por Fidel Castaño.⁴⁶ Peña, entonces enlace de la DEA con Los Pepes, pertenece hoy a la dirección de la DEA en Bogotá.

Después de la muerte de Escobar, Los Pepes se convirtieron en el pilar central de la organización paramilitar de los hermanos Castaño. A partir de 1994 entraron de nuevo en la ofensiva. Carlos Castaño fundó las ACCU como fuerza regional en Córdoba y Urabá. En la segunda mitad de los años noventa se siguió expandiendo el modelo, y finalmente todos los grupos confluyeron bajo la organización central única AUC.

La cooperación con el ejército es extensa, así lo demuestran innumerables ejemplos como la masacre de Mapiripán. En la mañana del 15 de julio de 1997, 300 paramilitares de las AUC de Urabá alcanzaron la pobla-

45. Castillo, Fabio, *Los jinetes de la Cocaína*, Centros de Estudio del Espectador, 1988, p. 72.

46. Serrano, Pascual, Se confirma la financiación y apoyo de Estados Unidos a grupos paramilitares colombianos, 5 de diciembre de 2000, www.rebellion.org.

ción en el departamento del Meta. En seis días asesinaron a 48 personas de forma bestial, las decapitaron, las descuartizaron y las arrojaron al Río Guaviare. El ejército llegó a Mapiripán justo cuando ellos ya se habían retirado. Al mismo tiempo a unos pocos kilómetros de distancia en el campo Barrancón del ejército, finalizaba un entrenamiento de fuerzas especiales. Estaba presente toda la cúpula del ejército colombiano y algunos oficiales estadounidenses. Anteriormente en ese lugar⁴⁷ unidades especiales de Estados Unidos habían entrenado durante meses a la II Brigada Móvil y a los paramilitares. Declaraciones y documentos demuestran que un oficial del servicio secreto de la esa brigada coordinó la llegada de los paramilitares y que otros dos militares fletaron los aviones en los que viajaron más de 100 paramilitares hasta el aeropuerto –controlado por el ejército– San José de Guaviare.⁴⁸ El general que en ese entonces dirigía la VII. Brigada del ejército fue informado por vía escrita y telefónica del ataque, sin hacer nada al respecto.

El Plan Colombia cuadruplicó finalmente el número de soldados profesionales y multiplicó por veinte los helicópteros del ejército, aviones de inspección y consejeros militares mientras que el número total de los paramilitares que acogían satisfactoriamente al plan aumentó de 5.000 a 12.500.

En los territorios definidos por el Plan Colombia como zonas prioritarias los paramilitares están también particularmente activos.⁴⁹ Según un paramilitar entrevistado por el *Boston Globe*, el Plan no hubiese sido viable sin los paramilitares. La estrategia conjunta fue acordada entre ellos y el ejército. De igual forma, el ex defen-

47. Alvan: Denuncia Luis Guillermo Pérez, del colectivo de Abogados, en: ANN, 31 de marzo de 2000.

48. Forero, Juan: Colombia Massacre's Strange Fallout, en: *New York Times*, 23 de febrero de 2001.

49. Rüttsche, Bruno (Grupo de trabajo: Suiza-Colombia): Kolumbien – am Abgrund eines offenen Krieges, September 2001.

sor del pueblo para los Derechos Humanos de la ciudad de Puerto Asís, Germán Martínez, observa este hecho en forma similar: «El fenómeno paramilitar en Putumayo es la punta de lanza del Plan Colombia para hacerse con el control territorial de las áreas que han de ser fumigadas». ⁵⁰

Los paramilitares se han apropiado simultáneamente de la mayor parte del negocio de la droga, controlan las rutas claves del narcotráfico, el lavado de dinero y con ello el 70% de las exportaciones de droga. ⁵¹

En el año 2001 los paramilitares comenzaron a colocar progresivamente en la mira a centros urbanos. Asimismo la ciudad Barrancabermeja, al norte de Colombia, de 400.000 habitantes, es ocupada *de facto* por las AUC luego de varias masacres posibilitadas por el ejército. Las AUC patrullan las calles libre y abiertamente e imponen sus reglas. La organización política y social es casi imposible, cientos de activistas cayeron como víctimas de las «limpiezas».

Los grupos paramilitares se componen también en parte, por militares. Las FARC y el ELN presentaron, luego de un ataque a cinco campos paramilitares en el sur de Bolívar en el año 2001, varios documentos de identificación de soldados de carrera activos que fueron encontrados entre los paramilitares muertos, entre ellos un líder. ⁵²

En los últimos años, los paramilitares han operado igualmente de forma creciente en Ecuador, Panamá y Venezuela. Ellos atacan, amenazan, asesinan y desplazan a la población en las zonas fronterizas. Esto cumple con el

50. Serrano, Pascual: Los paramilitares colombianos reconocen que operan en coordinación con las fuerzas del Plan Colombia, 17 de mayo de 2001, www.rebellion.org.

51. Zelik, Raul: Ursachen der Gewalt, en: Zelik, R. / Azzellini, D.: Kolumbien - Große Geschäfte, staatlicher Terror und Aufstandsbewegung, 1999.

52. Emanuelsson, Dick: «La trinchera se convirtió en tumba de los paracos», en: *Voz* Nr. 2079, 31 de enero al 6 de febrero de 2001.

interés del gobierno estadounidense de ejercer presión a los países vecinos para militarizar sus fronteras.

El 10 de septiembre de 2001 el gobierno de Estados Unidos colocó a la AUC en su «lista de grupos terroristas».⁵³ Sin embargo, este hecho no tuvo consecuencias directas. No se buscó ni se persiguió a Castaño, pues él representa una figura igualmente clave para Estados Unidos, quien ofreció repetidas veces en años anteriores hacer que los narcotraficantes colombianos se sometan, y éstos se encontraron varias veces por su iniciativa. En marzo de 2000 fue capturado el ex fotógrafo de moda e informante de la DEA, Baruch Vega, que había organizado numerosos encuentros entre la DEA y narcotraficantes colombianos para negociar su reintegración a cambio de pagos millonarios y el abandono del negocio de la droga.⁵⁴ Según el ELN son ya más de un centenar de sometidos los que han pagado fianzas individuales que oscilan entre 10 y 20 millones de dólares, a cambio reciben varias docenas de visas de residente para vivir e invertir sus capitales en Estados Unidos».⁵⁵

Durante la primavera de 2001, Carlos Castaño renunció a ser el líder militar de las AUC y se convirtió poco después en su “líder político”. Salvatore Mancuso fue nombrado nuevo líder militar de las AUC y se instituyó un Estado Mayor de 10 personas (incluyendo a Mancuso). A mediados de 2002 las AUC fueron disueltas formalmente y presuntamente reorganizadas sin la participación de los bloques implicados en el narcotráfico y graves violaciones a los derechos humanos. Un paso para posibilitar una imagen limpia en las negociaciones con el gobierno.

53. En cuanto a las razones que tuvo Estados Unidos para hacerlo existen algunas especulaciones: estrategia de relaciones públicas, presionar más la legalización, etc., ante todo se considera seguro que eso no hubiera sucedido un día más tarde.

54. Valencia, Alirio Bustos: Alta traición de la DEA, en: *El Tiempo* 13 de septiembre de 2000.

55. Beltrán, Pablo: Los secretos mejor guardados de la guerra civil colombiana, sin año apróx. Octubre 2000, <http://www.eln-voces.com/>.

El Para-Narco-Estado

Luego de las elecciones para el congreso en marzo de 2002, Salvatore Mancuso anunció que las AUC habían alcanzado su primer «éxito», ya que más del 35% de los 268 diputados que ingresaron por diferentes partidos o como candidatos regionales serían sus representantes. En abril ganó las elecciones a la presidencia el candidato de extrema derecha y formalmente independiente Álvaro Uribe Vélez. Una de las primeras felicitaciones que recibió provino de las AUC. Es un «presidente digno» dijo Mancuso, conocido personal de Uribe. Ya desde antes, los paramilitares habían condecorado a Uribe como «su candidato», sus oficinas de campaña electoral se encontraban incluso en los campamentos de las AUC. Luego de cinco décadas, el ala más sanguinaria de la oligarquía de la extrema derecha consiguió conquistar el poder estatal y colocar al presidente.⁵⁶

Álvaro Uribe mantuvo, por lo menos desde 1981, contactos intensivos con narcotraficantes y paramilitares. Su padre era inclusive narcotraficante. Uribe hijo entró en el negocio a principios de los años ochenta como Alcalde de Medellín, durante el tiempo de Pablo Escobar (en esa época compañero de partido de Uribe y hasta obtuvo para entonces un puesto de diputado para los liberales). A principios de los años noventa, como director de la administración de aviación civilorepartió con ahínco licencias y autorizaciones de vuelo a colaboradores del cartel de Medellín. En su periodo como senador de la república pertenecía al bloque de los diputados leales a los barones de la droga, que impedían cualquier ley en su perjuicio.⁵⁷

56. Los resultados electorales no dicen mucho. En las elecciones del congreso de 23,9 millones de electores sólo participaron 10 millones. 1,4 millones de votos eran inválidos, en blanco o abstenciones. Muchos de los votos para Uribe en las regiones rurales fueron conseguidos a la fuerza por los militares. En 248 casos se investigó por fraude electoral, y fiscales y autoridades electorales dieron a conocer la existencia de cuatro millones de credenciales electorales de fallecidos.

57. Contreras, Joseph: *Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez*, 2002.

Entre el 1995 y 1997, como gobernador de Antioquía, Uribe fomentó los paramilitares legales fuertemente armados, semi-privados pero formados por el servicio secreto militar Convivir. Durante el mandato de Uribe, los Convivir desplazaron a más de 200.000 personas y asesinaron a miles.⁵⁸ Cuando posteriormente fueron prohibidas a fines de 1997, se fusionaron con las AUC. Cínicamente, Uribe se jacta hasta hoy de haber logrado la tranquilidad en «su región».

Uribe apuntó desde un primer momento a una intensificación de la guerra. Cinco días después de la toma de posesión, decretó un estado de excepción que ha permanecido en vigor ininterrumpidamente. Esto encomienda competencias civiles al ejército y suprime derechos civiles vigentes formales de manera fáctica. 26 departamentos al norte del país y tres en el Arauca fueron colocados bajo el control directo del ejército como áreas especiales de seguridad denominadas «Zonas de Rehabilitación y Consolidación». El gobierno inició a lo largo de todo el país la construcción de una red de informantes que debe incluir a un millón de personas (parte de ellas provistas de armas de guerra) en las estructuras de información del ejército. Adicionalmente, el gobierno amplió el ejército de 168.000 soldados con 30.000 nuevos soldados de carrera, y empezó a capacitar entre 20.000 y 30.000 «soldados campesinos», un tipo de «protectores de aldeas», paramilitares legales que viven en sus comunidades de origen. El servicio militar obligatorio fue extendido a seis meses y anunció que 10.000 reservistas del ejército y 20.000 policías pensionados iban a ser reintegrados a las estructuras de defensa.

El 1 de diciembre de 2002, gran parte de los frentes de la AUC anunció un alto el fuego para entrar en negociaciones con el gobierno.⁵⁹ A cambio de su desmovili-

58. Contreras 2002: p. 111 ss.

59. A pesar de ello, asesinaron a casi 200 personas sólo en los primeros dos meses.

zación exigieron su reconocimiento como actores políticos en el conflicto, salvoconductos para sus dirigentes inculpinados de narcotráfico, la puesta en libertad de sus más de 1.000 compañeros detenidos, una condonación de la pena para los activos y el pago de un sustento mensual de casi 550 dólares por persona. Al mismo tiempo, la AUC se reservó el derecho de «reaccionar en legítima defensa». La oferta se dio con la ayuda de altos representantes de la Iglesia católica, tradicionalmente de derecha, estrechamente vinculados con la oligarquía. De hecho, Uribe y otros tres ministros pertenecen también a la orden católica de extrema derecha Opus Dei.

Antes de fin de año, el gobierno cambió la legislación que no permitía negociar con grupos armados sin estatus político reconocido para así evitar el reconocimiento oficial de las AUC. En enero de 2003, la ley competente a la guerrilla para la condonación y disminución de la pena para aquellos que colaborasen con la justicia fue extendida hacia los paramilitares. La impunidad para las AUC es también significativa para la oligarquía y el gobierno. Nadie puede permitirse que altos paramilitares declaren sus conexiones ante un juzgado.

Los frentes más importantes y poderosos de los paramilitares sin embargo no participan en las negociaciones. El Bloque Metro con 1.500 armados en Medellín rechazó desde un principio cualquier conversación, y el Bloque Élder Cárdenas con 1.500 armados en Antioquía y Chocó, que controla el contrabando de armas desde Panamá para el resto de los frentes paramilitares, se retiró de las negociaciones en enero de 2003. En abril se retiraron igualmente de la mesa de negociaciones las ACC de Casanare, presuntamente con 3.500 armados. Las conversaciones con el gobierno comenzaron a pesar de ello el 22 de enero de 2003. Así el gobierno de Uribe emprendió un paso que, hasta entonces, ningún gobierno había dado: el reconocimiento fáctico de los paramilitares como actores políticos independientes.

En realidad se trata de la amnistía de los paramilitares y de su integración al aparato represivo oficial.⁶⁰ Así anunciaron las AUC: «Mientras la amenaza terrorista se mantenga sobre Colombia y el Estado no pueda contenerla, nos mantendremos activos así sea en ámbitos de organizaciones de defensa legales con las cuales estamos listos para cooperar». La integración podría desarrollarse a través de la red de informantes iniciada por Uribe o del “Programa de soldados campesinos”. Estos procedimientos fueron propuestos por la conservadora Rand Corporation ya desde el año 2001: «... sería valioso recapacitar hasta qué medida la política de desalentar la organización legal de comunidades de autodefensa es sabia. Una red de organizaciones de autodefensa supervisada conforme con el modelo peruano podría ser una alternativa a los grupos ilegales». ⁶¹ Entonces Estados Unidos podría aumentar la ayuda militar para Colombia, sin exponerse a las críticas cada vez más fuertes a causa de la cooperación entre el ejército y los paramilitares.

El 13 de mayo de 2004 el gobierno firmó con diez comandantes de las AUC, que dicen representar a 90% de los paramilitares, un acuerdo sobre la instalación de una «Zona de Ubicación» de 368 kilómetros en Córdoba, en la cual se reúnen con 400 hombres armados de su guardia personal y gozan de inmunidad frente a las órdenes de captura, para así seguir negociando. Al mismo tiempo sus combatientes quedan distribuidos por todo el país. Cínicamente los paramilitares en el pasado han desplazado o asesinado gran parte de la población que vivía en la zona.

Y aunque exista un supuesto alto al fuego desde el 1 de diciembre de 2002, Amnistía Internacional declara en el informe anual 2004 sobre Colombia que «los para-

60. Eso no sería un paso novedoso. En el pasado, se integraron por ejemplo los combatientes desmovilizados de la guerrilla maoísta EPL a unidades rurales de la Policía política DAS y cometieron numerosos asesinatos y masacres.

61. Rand Corporation 2001: *Columbian Labyrinth*, Internet Edition www.rand.org, p. 60.

militares siguieron siendo responsables de matanzas, homicidios selectivos, “desapariciones”, torturas, secuestros y amenazas. Durante 2003 se les atribuyó la responsabilidad de la muerte o “desaparición” de al menos 1.300 personas, más del 70% de todos los homicidios y “desapariciones” de los que se conoce la autoría por motivos políticos no relacionados con los combates.⁶² En 2003 fueron desplazados 250.000 colombianos, 20.000 pidieron asilo político en el exterior. El número total de desplazados subió así a 2,96 millones, a nivel mundial el número más alto después de Sudan y el Congo.

Sin embargo, el gobierno empezó a negociar en enero de 2003 para declarar sorpresivamente en julio que los paramilitares no entregarán todas sus armas hasta el 2005. El concepto de «conversaciones de paz» se encuentra realmente fuera de lugar. Sus relaciones con los centros del poder son tan estrechas que los líderes paramilitares Salvatore Mancuso y Diego Murillo Bejarano, alias *Don Berna*, lo evidenciaron recientemente cuando nuevamente reclamaban salvoconductos y la no aceptación de cualquier demanda de extradición de Estados Unidos: «Existimos bajo la responsabilidad del Estado y los gobiernos que nos llevaron a velar por la justicia y la seguridad con nuestros propios puños y por nuestros propios medios. Si hablan de cárcel por lo que hicimos, todos ellos deben ir con nosotros».

Desde el comienzo de las negociaciones, no ha llegado a la luz pública casi nada acerca de sus contenidos y su evolución. En los acuerdos firmados hasta ahora no se menciona cómo se van a tratar los casos de graves violaciones a los derechos humanos y faltas al Derecho Internacional humanitario, juicios penales en curso y paramilitares encarcelados. Las organizaciones de base de la alianza de paz Planeta Paz afirman que «la propuesta “Ley de Justicia y Rehabilitación” sirve a los paramilita-

62. <http://web.amnesty.org/report2004/col-summary-esl>.

res para su integración en las instituciones políticas del país».

La primera “desmovilización” constata los temores. El 25 de noviembre de 2003, 855 miembros de las AUC (del Bloque Cacique Nutibara, BCN, de Medellín) entregaron unos 110 fusiles de asalto Kalashnikov, varias pistolas automáticas, revólveres, rifles y armas de fabricación casera, porque supuestamente actuaban en turnos y por eso no todos tenían armas. José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de la organización para los derechos humanos Human Rights Watch, calificó el acto como «espectáculo de la impunidad». Luego de una “resocialización” de sólo tres semanas, los paramilitares retornaron con créditos y empleos a las barriadas que habían aterrorizado anteriormente. De ellos, 698 fueron empleados por las autoridades comunales y 200 para patrullar una empresa de vigilancia en las barriadas. Diez días antes Amnistía Internacional ya había informado que los paramilitares eran paulatinamente “reciclados” por servicios de vigilancia o habrían recibido armas y uniformes como “soldados campesinos”. Desde octubre de 2004 se sabe que gran parte de los desmovilizados del BCN conforman hoy el Bloque Héroes de Granada que tiene actividad en la misma zona de Medellín.

La noticia de que se habría perpetrado un atentado mortal el 16 de abril contra Castaño trajo mayor confusión. Su esposa notificó que, de hecho, él había sobrevivido aunque desde entonces nadie lo ha visto. Su profundo conocimiento, asociado con la persistente y abierta disposición a hacer declaraciones, hace pensar que fue víctima de las luchas internas. Aunque una noticia no oficial del 1 de junio afirma que Castaño habría sido llevado a Israel por representantes de Estados Unidos o estaría en el camino hacia allá. En el diario *El Tiempo* simpatizante del gobierno, Castaño fue retratado como la parte moderada de los paramilitares sin el cual las negociaciones podrían fracasar. Poco tiempo después se firmó el acuerdo sobre las «zonas de ubicación».

La verdadera crisis del proceso de negociación parece estar en las luchas internas por el control de los narco-negocios valorados en millones y el poder regional. Seguramente, los líderes paramilitares tampoco aceptan porqué, como antiguos aliados de la política estadounidense, ahora deberían sentirse amenazados por la extradición hacia Estados Unidos. Una solución podría radicar en la transferencia de una parte de los paramilitares en otro proyecto. Así, por lo menos pueden interpretarse las palabras de Uribe, cuando afirma que la extradición de diversos jefes paramilitares hacia Estados Unidos, entre ellos también Castaño y Mancuso, no es negociable siempre y cuando se lo ganaran. Una posibilidad para ello sería Venezuela. La administración estadounidense le tiene manía al gobierno local y las AUC advirtieron que desde hace un año allí organizaban paramilitares. En mayo de 2004 detuvieron en la finca de un cubano exilado a unos 100 paramilitares colombianos que debían llevar a cabo operaciones *in situ*.

En Colombia por lo menos ya no se necesitan a los paramilitares, exceptuando algunos grupos en regiones específicas. Los claros nexos entre el ejército y los paramilitares deterioran la imagen del gobierno. Además casi siete millardos de dólares de ayuda militar a través del Plan Colombia le dieron la soberanía aérea al ejército. Simultáneamente, las misiones militares son progresivamente asumidas por Corporaciones Militares Privadas.

La externalización u *outsourcing* de la guerra sucia ha tenido ventajas significativas para el gobierno. Debido a que los paramilitares son considerados actores no estatales, Colombia apareció como un Estado amenazado por muchas partes, un poder neutral colocado bajo presión de la izquierda y de la derecha. Así, Colombia es una democracia reconocida internacionalmente, a pesar de que detrás de la fachada se erige un Estado paramilitar en el cual son asesinadas anualmente más personas que durante los 17 años de la dictadura militar chilena.

El ejército “limpio” puede contar con un reforzado apoyo internacional. También desde el punto de vista de la política interna el escenario descrito le sirve al gobierno. La presencia de innumerables actores armados aparentemente poco distinguibles y la violencia extrema han conducido a una despolitización, que en algunos sectores se convierte en una tendencia abierta de derecha: lo único que importa es la tranquilidad, sin tener en cuenta cuál sea su precio. Ésta es también la causa de la victoria electoral de Uribe.

Las CMP sirven para misiones no oficiales de contra-insurgencia. Así, María Salazar, secretaria de Estado suplente para la política antidrogas en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, puede sostener ante una subcomisión del Congreso: «El Ministerio de la Defensa no violará el lineamiento que separa la lucha antidroga de la lucha contrainsurgente»⁶³ –para las CMP no vale esta limitación–. Cuando llega a la luz pública que estos (presuntos) límites fueron transgredidos, el gobierno estadounidense rechaza toda culpa al respecto, pues se trata de empresas privadas. Y si un empleado de una CMP muere en acción, eso llama mucho menos la atención que cuando se produce la muerte de un soldado estadounidense. Desde 1997 han muerto en Colombia por lo menos 16 ciudadanos americanos miembros del ejército, de la DEA o de las CMP, todos fueron declarados como civiles aunque fueron enterrados con honores militares.⁶⁴

El gobierno de Bush gasta mucho en esta guerra. Sólo en el primer trimestre del año 2003 se presentaron para su aprobación al Congreso 105 millones de dólares

63. McDermott, Jeremy: U.S. crews involved in Colombian battle, en *The Scotsman*, 23 de febrero de 2001.

64. La agencia de noticias Anncol presentó en agosto de 2002 una lista de doce personas con sus nombres. Algunos de ellos fueron disparados, la mayoría perdió la vida por derrumbes de aviones de inspección y de fumigación, en algunos casos se presume que fueron derribados por la guerrilla. Desde entonces han muerto por lo menos otros cuatro ciudadanos estadounidenses en incidentes similares.

en ayuda militar adicional, y 50 soldados de unidades especiales estadounidenses fueron enviados para la búsqueda de los tres miembros de CMP secuestrados. El 25 de marzo de 2003 fue derribado nuevamente un vuelo de inspección y los tres pasajeros perdieron la vida. Estados Unidos se ve cada vez más profundamente envuelto en la guerra de Colombia. Ciudadanos norteamericanos y miembros de las CMP de otras nacionalidades están involucrados en forma activa, estructural y sistemática en la guerra. Es sólo cuestión de tiempo que los primeros soldados estadounidenses entren en enfrentamientos armados con la guerrilla, lo que podría servir como pretexto para un compromiso directo de las tropas estadounidenses en Colombia. Ante el desarrollo político de desventaja para Estados Unidos (triunfos electorales de Chávez en Venezuela, Lula en Brasil, la política de Kirchner en Argentina y un fuerte movimiento en Bolivia), tienen un gran interés en una fuerte presencia militar. En ese contexto son preocupantes las incursiones de paramilitares en territorio venezolano. Estados Unidos podría estar interesado en provocar una circunstancia para justificar el envío de contingentes de mayores tropas hacia Colombia.